

ESPACIO CORTESANO, DOMINIO EMINENTE DEL REY Y ADMINISTRACIÓN EN LA CASTILLA MODERNA: LAS LICENCIAS DE SACA

Ignacio EZQUERRA REVILLA

Instituto Universitario «La Corte en Europa»

Universidad Autónoma de Madrid

Introducción

El caballo era una realidad visible en el mundo doméstico regio principalmente a través de las Caballerizas o las Guardas, pero también puede percibirse indirectamente su presencia en una dependencia fundamental, cuya centralidad permitía transmitir en todos los reinos de Castilla un sentido de pertenencia doméstica, como era la Cámara. Cámara entendida como dependencia material restringida de permanencia del rey en Palacio, recipiente de mecanismos de control de acceso al monarca, una configuración humana organizada en torno a su presencia física¹. Pero también, y sobre todo, como ámbito en el que el rey custodiaba su ajuar, su tesoro y sus documentos², y

¹ Como señala Costa Gomes para el caso portugués, la Cámara era un órgano de la Corte “mettant en place des mécanismes de contrôle de l'accès au souverain”, una configuración humana organizada alrededor de la presencia física del rey. Los oficiales que frecuentaban la Cámara Real quedaban convertidos en verdaderas correas de transmisión que hacían posible la articulación de un sistema institucional complejo y estratificado, en el que las esferas de acción de los diversos agentes podían cruzarse y superponerse, R. Costa Gomes: “Le Conseil Royal au Portugal (1400-1520)”, en C. MICHON, (ed.): *Conseils et conseillers dans l'Europe de la Renaissance*, v. 1450-v. 1550, Presses universitaires François-Rabelais de Tours-Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 147-174.

² Salustiano de Dios: *Gracia, merced y patronazgo real: la Cámara de Castilla entre 1474-1530*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales 1993, p. 61.

compatibilizaba su dimensión personal y la administrativa, los dos cuerpos del rey referidos por Kantorowicz³.

Si se parte de la base de que la visión del monarca para gobernar el territorio era patrimonial y doméstica, como señaló Otto Brunner⁴, la Cámara quedaba así convertida en un vector doméstico de extensión horizontal, mediante el cual el gobierno se entendía como la ampliación integradora de ese ámbito restringido al espacio circundante, del que formaba parte la realidad ecuestre, que, de este modo, era necesario administrar. De forma metafórica, las referidas arcas de ajuar, tesoro y documentos alargaban sus límites para agregar el espacio en torno a esa realidad doméstica. Era un procedimiento simple y complejo a un tiempo, como fundado en bases poco tangibles, pero que permaneció desde el medievo hasta el fin de la Edad Moderna, constituyendo además un sustrato necesario para el posterior desarrollo del Estado liberal.

El territorio como espacio cortesano. La ampliación horizontal de la Cámara Real

La percepción territorial de la Corte ha solido estar oscurecida por una asociación prioritaria del concepto con otras manifestaciones más espectaculares y conformes con una visión general de la misma, como la vida palaciega, su boato y compulsión cultural, la solemnidad y ceremonial asociadas a la persona real, el papel ejercido en su torno por la nobleza, etc. En ayuda de tal consideración no ha venido, ciertamente, la realidad jurisdiccionalista de la Monarquía Corporativa, que ha tendido a dificultar, más que otra cosa, la apreciación de una realidad transversal que ofrecía contexto al desarrollo de la vida política y administrativa de los reinos. Y, sin embargo, en espacios dotados de su propia coherencia doctrinal como el formado en Castilla por la Corte y los reinos, es legítimo preguntarse si ambos constituían dos realidades diferentes. Hasta tal punto el paradigma jurisdiccionalista (desde un punto de vista interno) o la consideración del conjunto de la Monarquía como una realidad compuesta (desde el externo) han entorpecido la referida interpretación de la Corte, que ha tendido a darse a esta un sentido intersticial, articulador de diferentes actores y dominios previos. Aunque poseía este carácter, la Corte era sobre todo una realidad antecedente, consustancial a la propia persona real y la adquisición del territorio, que se replegaba eventual o tácticamente conforme al pulso

³ E.H. Kantorowicz: *Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval*, Tres Cantos: Akal 2012 (estudio introductorio de J M. Nieto Soria)

⁴ O. Brunner: "La 'casa grande' y la 'oeconomica' en la vieja Europa", en *Nuevos caminos de la historia social y constitucional*, Buenos Aires 1976, pp. 87-123.

jurisdiccional, entendido como expresión jurídica del poder de diferentes grupos sociales que la corona, por lo demás, iba integrando conforme a su conveniencia política.

Al ser conquistada una región, todos los terrenos no cultivados pertenecían al rey que, a continuación legalizaba la transferencia de parte de ese conjunto al clero y a la nobleza por méritos de guerra. De acuerdo con ello, a partir del episodio de reconquista la proporción de territorio gozada por ambos poderes aumentó y la de la corona disminuyó⁵. Pero ello fue compatible con la conservación de un género de pertenencia eminente por parte del rey. Como lo demuestra el contenido del Título XI de la Segunda Partida, “Quál debe el Rey ser a su tierra”, que ofrecía el fundamento espacial de la tarea de reinar, y complementaba así la conocida descripción dual de la Corte contenida en la ley XXVII, Título IX de la Segunda Partida, “Qué cosa es Corte porque ha assí nome e quál deue ser”⁶. Creo que por este camino se puede entender la noción tradicional del *territorio*, más allá que —o además de— como una realidad física o geográfica, como una categoría política. Ya Covarrubias en su *Tesoro de la lengua castellana* indicaba este camino al definir *territorio* como “el espacio de tierra que toma algún pago o jurisdicción”⁷. En el caso de la jurisdicción real, unos reinos cuyo *equipamiento* político era sin duda una idea de Corte confundida con el propio territorio. Ante lo dicho, cabe afirmar que no sólo era territorial el Derecho general aprobado en Cortes⁸, ni el otorgado por el Príncipe era Derecho singular o privilegio, sino que, como vamos a ver, de este, de la Cámara Real emanaban, principalmente a través del Consejo Real, relaciones jurídicas de orden territorial.

⁵ Ejemplares resultan, a este respecto, las donaciones efectuadas por Alfonso IX y Fernando III a la Orden de Alcántara, en pago a su contribución en la conquista de Cáceres, Montánchez, Mérida, Badajoz, Elvas, La Serena y Magacela. Resultado de las cuales fue lo que Carlos de Ayala ha llamado un “proceso de territorialización del señorío alcantarino”, C. de Ayala Martínez: “Pérez, Arias”, voz del *Diccionario Biográfico Español*, XL, Madrid: Real Academia de la Historia, pp. 716-717, y las fuentes allí citadas.

⁶ *Las Siete Partidas, del Sabio Rey don Alonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio López del Consejo Real de las Indias de Su Magestad*. Impreso en Salamanca por Andrea de Portonariis, Impressor de Su Magestad. Año M.D.L.V. Con privilegio Imperial, respectivamente ff. 31v.-32r. y 29r.

⁷ Sebastián de Covarrubias: *Tesoro de la Lengua Castellana o Española según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en la de 1674*, ed a cargo de Martín de Riquer, Barcelona: Alta Fulla 1998 (ed. facsímil de la de Barcelona: Horta, 1943), p. 959.

⁸ Bartolomé Clavero: “Notas sobre el derecho territorial castellano, 1367-1445”, *Historia. Instituciones. Documentos* 3 (1976) pp. 141-166.

Las manifestaciones administrativas emanadas de la persona real drenaron continuamente el territorio de los reinos de Castilla y Portugal, dotándolos de cohesión y conciencia de pertenencia a una misma y continua realidad político-administrativa. La influencia ejercida por la Majestad Real en su entorno, a través de la Cámara –aquella dependencia más restringida, en la que conciliaba su faceta cotidiana más íntima con la labor de gobierno-, se apreció no sólo en el espacio inmediato al mismo. Si se concibe la jurisdicción real como algo único e indivisible, más allá de divisiones arbitrarias determinadas por motivos históricos y funcionales y se consideran Consejo, Chancillerías y Corregimientos como un todo; y, por otro lado, se cruza esta realidad con la inserción de cada una de sus partes y por lo tanto del conjunto resultante en la privacidad regia –como varios indicios en cada caso permiten deducir-, gana claridad la idea de Corte como entidad territorial identificable en lo sustancial con el espacio de los propios reinos castellanos. Como unidad espacial o estrato permanente, de cambiante visibilidad conforme a prioridades directamente jurisdiccionales o de orden temático que determinaban perímetros de naturaleza típicamente cortesana –las consabidas cinco leguas- modulables según las circunstancias, y cuya superposición y multiplicación, eventual o permanente, confería consistencia más o menos visible a ese conjunto espacial. Perímetros emanados de cada uno de los tres rangos que lo conformaban (Consejo, Chancillerías y Audiencias y Corregimientos) para articular un espacio que pretendía cubrir de forma total y homogénea el territorio, aún cuando hubiese espacios “en sombra”.

Sin duda, para acuñar la idea del tema de este trabajo, la salida de un bien de un contorno determinado, informado por un órgano tan integrado en el espacio restringido del rey como la del Consejo de Cámara y autorizado por el propio monarca, era imperativa la definición previa del mismo. Ambos aspectos ilustraban a las claras un fenómeno de expansión territorial desde el corazón de Palacio, la *Cámara Real*, hasta el propio límite de los reinos, patente en otros muchos aspectos. Como, por ejemplo, los nexos de dependencia semántica con ese espacio doméstico visibles en los castillos y fortalezas fronterizas.

Quizá la forma más gráfica de entender la superposición del proceso expansivo de la Cámara con el propio territorio de los reinos sea atender a sus propios límites, y a las tensiones que generaba el contacto por fricción con otra realidad paralela. Por ejemplo, expansión de la Cámara castellana, versus expansión de la Cámara portuguesa. En ambos casos, los castillos son representación material de tal tensión, y en su contorno amurallado,

especialmente en el caso portugués⁹, acogieron el desarrollo urbano de las villas correspondientes, e incluso prestaron en su seno un recinto especialmente protegido o destacado para la celebración de las reuniones del concejo, como ha tratado Rita Costa Gomes. Caso de Pinhel, o de Castelo Novo, donde la Casa de Cámara resultó de la apropiación de una parte de los edificios por el concejo¹⁰. Prestemos atención al hecho de que, significativamente, la forma de designar en portugués tal dependencia doméstica regia y ayuntamiento coinciden: Câmara. A su vez, la expansión metafórica de la Cámara también se advertía con ocasión de las eventuales fricciones en los márgenes de su máxima extensión espacial. Por ejemplo, tanto autoridades municipales como reales -que personificaban esa expansión continua y tentacular de la Cámara Regia-, estuvieron presentes en 1296, en la frustrada delimitación fronteriza en Monforte do Río Livre, Melgaço, Aldeia do Bispo, Beira e Monforte¹¹.

En el mismo sentido, las fortalezas compartían con las dependencias palaciegas su estatuto de exención de la jurisdicción común. Si bien los *alcaldes de sacas*, a los que luego me referiré, podían recabar la colaboración de los alcaides de los castillos donde hubiera podido acogerse un contrabandista. En ese caso, el alcaide o sus lugartenientes debían entregarlo y si afirmaban que no se encontraba el requerido en el recinto, el alcalde podía proceder a comprobarlo¹². En ocasiones, la referida continuidad y protección del espacio nacido desde la Cámara se fortalecía por la vía personal, y un ministro integrado en ella ejercía al tiempo como alcaide, caso de Juan de Gamboa, alcaide de Fuenterrabía y miembro del Consejo Real, quien recibió instrucciones de evitar el paso de cosas vedadas a Francia¹³.

Por lo demás, quizá sea el sentido de integración cortesana emanado desde la Cámara el que permita comprender las diferencias de percepción de un mismo espacio en el entorno local y desde la Corte, entendida como lugar de permanencia del rey, señaladas por Asenjo González¹⁴; así como el compromiso

⁹ Pero también en el castellano, como indica el caso de Bayona,

¹⁰ R. Costa Gomes: *Castelos da raia*, I, Beira, Lisboa: IPPAR 1996, pp. 46-47.

¹¹ R. Costa Gomes: *Castelos da raia*, II, *Tras os Montes*, Lisboa: IPPAR 2003, p. 21.

¹² M. Pino Abad: *Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla (Siglos XIII-XVIII)*, Madrid: Dykinson 2014, pp. 61-62.

¹³ *Ibidem*, p. 84.

¹⁴ "... los términos territorio y frontera definen una realidad espacial concreta, que a su vez es percibida de modo distinto por parte de los vecinos del entorno y de las latas instancias de poder. Ciertamente, el territorio de la frontera que delimitaba soberanías distintas a uno y otro lado, era también el espacio reconocible como propio por parte de los vecinos de un concejo", M. Asenjo González: "Actividad económica, aduanas y relaciones de poder en la frontera norte de Castilla en el reinado de los Reyes Católicos", en *la España Medieval* 19 (1996) pp. 275-309, pp. 275-276.

que este sentía hacia la defensa de ese espacio. Tenencia de fortalezas y dominación jurisdiccional eran pasos seguidos, tanto para el rey conquistador, como para los señores que recibían posteriormente el territorio.

La definición del dominio eminente del rey en ese espacio acotado

Como escribió Vicente Branchat para el caso valenciano, “Tienen los príncipes, por razón de la suprema potestad, un dominio general en todas las tierras, montes, leñas, yerbas y pastos de sus reinos, en virtud del cual todas estas cosas se entienden y presumen ser suyas e incorporadas a la Corona: de tal manera, que siempre que se ofrece duda sobre el todo o parte de ellas, entran fundando su intención contra cualquiera que no exhiba privilegio o título que acredite la legítima pertenencia”¹⁵. En el momento en que fue escrita, esta expresión se dirigía a reconstruir y proteger el patrimonio real en el reino de Valencia¹⁶, pero resulta adecuada para el espacio y el tiempo de este trabajo.

Si insisto en la señalada filosofía de gestión es porque tal sentido de pertenencia patrimonial se extendía desde la plataforma representada por el territorio a los bienes radicados en él. No sólo era el espacio sino los bienes que acogía. La lógica de extensión espacial nacida en la Cámara Real originaba una lógica patrimonial que, en el sentido jurídico, y en el económico, tomó la forma de *dominio eminente* del rey sobre los bienes radicados en tal espacio. Concepto que, en virtud de la confusión propiciada precisamente por esa unicidad entre lo doméstico-patrimonial y lo general, desembocó finalmente en la noción de *dominio público*¹⁷.

En Castilla, la calidad patrimonial de ese espacio se hace especialmente elocuente por la confrontación de los respectivos procesos de definición orgánica de la Cámara y el Consejo Real. Con anterioridad a la delimitación de la primera en 1474, se abonó el solapamiento y confusión que siempre afectó a

¹⁵ V. Branchat: *Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Patrimonio en el reyno de Valencia y de la jurisdicción del intendente como subrogado en lugar del antiguo Bayle General...*, Tomo III, Valencia. En la imprenta de Joseph y Tomás de Orga, 1786, p. 207, apud E. Bauer Manderscheid: *Los montes de España en la Historia*, Madrid 1980, p. 49.

¹⁶ E. Ortega De La Torre: “Carlos III y la lucha por el Real Patrimonio en el País Valenciano: el informe Branchat (1784)”, en Mariano Peñalver, (coord.): *De la Ilustración al Romanticismo: IV Encuentro, Carlos III, dos siglos después. Cádiz, 7-9 de abril de 1988*, vol. 2, 1994, pp. 111-118.

¹⁷ L. Pérez Conejo: *Ensayo sobre dominio público y demanio litoral. Reflexiones jurídico-administrativas sobre el dominio público en general y el Demanio Marítimo-Terrestre en particular...*, Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2001, p. 33.

ambas *instituciones*, de distinción no manifiesta en términos formales. En una tendencia que redundaría en el sentido patrimonial que menciono: la Cámara sería el recipiente físico de atribuciones que, hasta ese momento, el rey desempeñaba por su propia persona.

En las *Ordenanzas* fundacionales del Consejo, de 1385, se le conferían todos los *hechos* del reino, a excepción de las cosas propias de la Audiencia y aquellas reservadas directamente al rey, que consistían en el nombramiento de los oficiales de Casa y Corte y los de alcance territorial y municipal, aspectos en los que es necesario atender a la intromisión representada posteriormente por el Presidente del Consejo, en su dimensión política, y en perjuicio de la Cámara *in solidum*; además de las tenencias de las fortalezas, las presentaciones de iglesias, las limosnas, toda clase de gracias y mercedes (entre ellas las tierras) o el perdón de los homicidas. Esto es, quedaban al margen de su conocimiento los asuntos de justicia litigiosa, pleitos entre partes, gracia, y aquellos que se pueden denominar de patronato real o eclesiástico. Pero, conforme a lo que señalo, se precisaba que los asuntos reservados al rey, y necesitados de su firma, no se librarían sin previa consulta del Consejo, de tal manera que esta nueva instancia cortesana entendería desde un principio de los negocios de gracia y merced, propios de la futura Cámara de Castilla¹⁸. En la misma línea, las últimas ordenanzas dadas al Consejo en tiempo de su rey fundador, Enrique III, incluían entre las atribuciones que correspondía librar al rey por su sólo nombre las *licencias de saca*¹⁹, clara señal de su sentido doméstico-patrimonial. Pero, en todo caso, el Consejo será siempre en adelante un claro correlato, una correa de transmisión de esta dinámica de homogeneización Cámara Real-Territorio. En las Ordenanzas del Consejo de 1406 se insistió en la permanencia de las cosas tocantes a sacas vedadas entre las atribuciones ejercidas directamente por el rey²⁰. E igualmente, la Cámara siempre será un órgano de expresión de la voluntad regia, carente de capacidad decisoria, pues los asuntos que pasaban ante ella dependían de la consulta y firma de los reyes, y su vía será, consecuentemente, la de hecho, y no la de derecho con audiencia de partes²¹. Por todo ello, no es de extrañar que piezas de ese ámbito exclusivo del rey pasasen indistintamente a la Cámara y al contrario, especialmente en lo relativo a la definición y protección de ese espacio de índole cortesana, como representaban las autorizaciones de saca de cosas vedadas o la provisión de tenencias de fortalezas. En el primer caso, en el contexto de la regeneración

¹⁸ S. de Dios, *Gracia, merced y patronazgo real...*, op. cit., pp. 89-90.

¹⁹ *Ibidem*, p. 92.

²⁰ *Ibidem*, p. 93.

²¹ *Ibidem*, p. 145.

administrativa que acompañó su inmediato acceso al trono, Felipe II valoró en carta a su padre la recuperación por la Cámara de la expedición de licencias para sacar cosas vedadas de los reinos²². En el segundo, las relaciones de atribuciones de la Cámara elaboradas desde el fallecimiento de Francisco de Eraso incluían con toda claridad la provisión de fortalezas²³.

Posteriormente trataré de las características propias de la figura administrativa de la licencia, pero ahora se debe referir que, en ocasiones, su concesión evidenciaba con claridad ese contorno del *dominio eminente*. El Padre Hernando de Mendoza, S.I., en un tratado compuesto para el conde de Lemos, virrey de Nápoles, se preguntó “Si puede el Virrey de Nápoles tomar para sí trata y venderlas, y aprovecharse del dinero que dellas se sacare”. De su argumentación se deduce que la exención del virrey de solicitar licencia en el caso de que incurriese en el ignominioso acto de sacar vino del reino, se debía al ejercicio implícito de ese *dominio eminente*. Los súbditos podían comerciar con esas licencias una vez obtenidas, pero no así el virrey²⁴.

Entre los bienes sometidos a tal dominio eminente destacaba el caballo, por su importancia para la sociedad moderna. Caballo y territorio eran entes interdependientes. Empequeñecer una dimensión territorial en principio inabarcable a escala humana, para conocerla o incorporarla al propio dominio, y

²² Carta desde Hampton Court, 1 de junio de 1555: “En lo que toca a que las liçençias que V.M. mandare dar de aquí adelante para sacar dinero, oro o plata o caualllos de aquellos reinos, pasen por Consejo de Cámara, como diz que se solía hazer siempre, V.M. mandará proueer lo que pareçerá conuenir a su seruicio y al bien de los negocios...”, M. Fernández Álvarez: *Corpus Documental de Carlos V*, IV, 1979, p. 222 (la carta completa en pp. 221-223).

²³ “Yten se despachan por Cámara todas las tenencias de fortalezas que perteneçen a Su Magd por uacaçión o dexaçión con consulta o sin ella poniendo su pareçer los de la Cámara...” (“Relación de lo q[ue] en el Consejo de Cámara se despacha de ordinario y la orden que se tiene”, Instituto Valencia de Don Juan (IVDJ), envío (e) 90, caja (c) 129, nº 524).

²⁴ “... y la razón es, porque estas licencias una vez alcançadas, son ya hazienda propria de aquél que las alcançó, y se las dieron para particular prouecho suyo, haziéndole proprio y verdadero señor d’ellas, y como tal las puede vender, y tomarse para sí el dinero. Pero la licencia, que tiene el virrey de dar licencias, no la tiene como hombre particular, ni para beneficio propio suyo, ni le han hecho propio, y verdadero señor d’ella: sino tiénela como cabeza, para bien del cuerpo, y como Governador para utilidad de sus súbditos, y finalmente como lugarteniente de su rey, para usar d’ella como le mandare, y assí no la puede vender en ninguna manera”, *Tres tratados compuestos por el P. Hernando de Mendoza, de la Compañía de Jesús, para el Illustrísimo y Excellentísimo Señor Conde de Lemos, virrey de Nápoles, y mandados imprimir por el Señor Don Francisco de Castro su hijo, y suçessor en el mismo cargo...* En Nápoles, por Tarquinio Longo, 1602, p. 48. El primer tratado se centraba en las gracias, el segundo en los oficios vendibles, y el tercero en las trata.

hacerlo en un espacio de tiempo razonable, dependió en buena medida del primero. Del mismo modo que, como vector de movilidad caracterizado por su agilidad, el territorio era el espacio natural propio del caballo, del que el hombre, en este caso el castellano de los siglos modernos, supo sacar provecho, en la medida que las circunstancias se lo permitieron. Ingrediente necesario para ello fue la referida concepción del territorio como plataforma, en la que la autoridad real se fundaba en un proceso más o menos implícito de expansión de la Cámara Real, en el que quedaban integrados en un todo continuo tan importante dependencia real y el espacio circundante. Que convertía en uno el espacio en el que se materializaban las decisiones relativas a la gestión material del territorio, con aquél en el que eran maduradas, principalmente por el cauce del Consejo Real.

Ya el *Libro de los Caballos*, compilado posiblemente por orden de Alfonso X, refería en sus primeras líneas: "... por que los reyes e los príncipes e los altos senores an a defender e a conquistar las tierras, tengo que ninguna cosa non les puede seer tan noble nin tan a pro para ellos commo los cavallos, por que con ellos los an a deffender e a ganar, et sin ellos non lo podrían fazer. Que ellos sean guardados e non reciban danno... que el danno que recibiesen sería perdimiento de los regnos e de las gentes"²⁵.

Vaya por delante que no es un tema en el que quien esto escribe sea experto, ni tomado el animal como parte de una manifestación pública de ostentación y posición social, ni en cuanto a su integración en diferentes áreas del servicio regio, entre las que destacaban la caballeriza o las guardas²⁶; aunque es verdad que no eran las únicas dependencias domésticas en las que, como digo, el caballo se dejaba notar con gran significado implícito²⁷. Aquí tomo al

²⁵ Apud Pero López De Zamora: *Libro de Albeytería*, Pamplona: s.a., p. 11 (ed. facsímil de la de Pamplona: Tomás Parralis de Saboya, 1571. Intr. y glosario a cargo de Teófilo Echeverría Belzunegui).

²⁶ A. López Álvarez: *Poder, lujo y conflicto en la corte de los Austrias : coches, carrozas y sillas de mano, 1550-1700*, Madrid: Polifemo, 2007; J.E. Hortal Muñoz: *Las Guardas Reales de los Austrias hispanos*, Madrid: Polifemo, 2013; F. Labrador Arroyo-A. López Álvarez: "Lujo y representación en la Monarquía de los Austrias: la configuración del ceremonial de la caballeriza de las reinas, 1570-1700", *Espacio, tiempo y forma. Serie IV. Historia Moderna* 23 (2010) pp. 19-39.

²⁷ Por ejemplo, en lo referido a los gentileshombres de la boca, Sigoney entendía el oficio como el escalón superior de una misma categoría, la de los *gentileshombres*, que se completaba con los de la casa y los costilleros. En este sentido, los tres debían servir con armas y caballos en tiempo de guerra, aunque el número variaba según su posición en la jerarquía (cuatro animales en el caso de los gentileshombres de la boca) y cabalgar dentro del escuadrón de la casa, siguiendo al estandarte de Su Majestad, a menos que tuviesen otro cargo militar (cuyo servicio prevalecería), "Relación de la forma de servir que se tenía en la

caballo como pretexto para ahondar en el conocimiento de ciertos aspectos de orden administrativo y *gracioso*, que permiten deducir la aludida importancia de la extensión de los códigos y procedimientos de gestión difundidos desde la Cámara Real al ámbito limítrofe. Conforme a tales rasgos, en ese espacio acotado de *dominio eminente* del rey al que me he referido, la orientación y aplicación de la política caballar correspondía, como en la generalidad de las materias, a aquellos organismos integrados en el espacio restringido del rey a través de los que se materializaba, en gran medida, tal horizontalidad: el Consejo Real y el Consejo de Cámara.

Delimitación de espacios y perímetros en materia caballar

La unidad esencial del espacio cortesano, con fundamento en un proceso de ampliación doméstica, propició una confusión entre lo patrimonial y lo administrativo y, a su vez, indujo ámbitos concretos de actuación de los que emanaron perímetros restringidos, que manifestaban la condición de tal espacio. Uno de ellos fue la adquisición de pan o granos²⁸. Otro, el representado por los Montes y la repoblación forestal, que obedeció a dos impulsos, mediante los que traslucen semejantes principios de *dominio eminente* patrimonial del rey y contribución a la felicidad de los súbditos. Por un lado satisfacer el consumo humano y cortesano y, por otro, cubrir las necesidades de la construcción naval, aspectos difícilmente compatibles. Por ello, se encauzaron por canales administrativos diferentes, el Consejo Real y los Alcaldes de Casa y Corte en el primer caso, y el Consejo de Guerra en el segundo, concomitancia orgánica (entre otros organismos) que también se puede advertir, como veremos, en el caso de la gestión caballar.

Por lo tanto, la densidad del espacio cortesano emanado desde la Cámara regia también respondía a la multiplicación o superposición de perímetros señalados en función de los mandatos o necesidades determinados por ese proceso de expansión horizontal. En el caso de la cría caballar, conllevó también una delimitación de tales circunscripciones interiores de orden cortesano. Se estableció una franja de doce leguas en el límite del reino de Castilla, en la que

casa del Emperador Don Carlos nuestro señor, que aya goría, el año de 1545 y se auía tenido algunos años antes, e del partido que se daua a cada uno de los criados de Su Majestat que se contaban por los libros del Bureo”, en J. Martínez Millán, (dir.): *La Corte de Carlos V, V, Los servidores de las Casas Reales*, Madrid: Sociedad Estatal para la Celebración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 180-211, p. 188.

²⁸ C. de Castro: *El pan de Madrid: el abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen*, Madrid: Alianza Editorial, 1987.

era obligatorio el registro del ganado caballar ante un alcalde de sacas, escribano público y testigos. Esta obligación afectaba tanto a pasajeros como a vecinos, y debía ser cumplida en el primer pueblo incluido en ese perímetro, y situado en la ruta del caballo o yegua. Sólo cumplido tal requisito el propietario podría circular en el referido espacio, para lo que necesitaría, además, de carta de vecindad del lugar en que morase, sellada y signada por el escribano público de él.

Las disposiciones aplicables fueron sancionadas por Enrique II²⁹, y recopiladas³⁰, pero, de acuerdo con su importancia en la sociedad y economía de la época, el interés por la cría y protección del caballo venía de atrás. Antes del ordenamiento de leyes de Cortes de Burgos de 1377, en el que se dio forma a esta vertiente de la política regia, una petición de las Cortes de 1367 —celebradas asimismo en Burgos— se ocupaba de la cuestión, según ha transcrito Bermejo Cabrero³¹. Como decimos, la legislación pertinente deja ver la existencia de un espacio de origen cortesano, extendido desde la Cámara Real hasta el propio límite de los reinos, en el que se manifiesta, conforme a la referida dinámica de expansión doméstica, una continuidad territorial de naturaleza patrimonial regia, tanto en lo referido a su propia dimensión espacial, como al contenido de la misma. Ámbito en el que los bienes contenidos, al margen de su propiedad particular concreta, estaban vinculados al dominio patrimonial eminente del rey. Espacio cortesano y dominio eminente se entrecruzaban para explicar la institución de pasos físicos de inserción y salida de tal espacio (puertos secos), y de oficiales especialmente encargados de inquirir las conductas que supusieran un menoscabo o merma de ese conjunto patrimonial del rey. De acuerdo con los principios políticos de la monarquía moderna, aquellos a los que el Consejo Real ajustaba su proceder, en ese espacio se protegían especialmente aquellos bienes que, siendo patrimonio del rey, contribuían en manera especial a garantizar la felicidad de sus súbditos, como buen *paterfamilias*; aquellos que, en definitiva, les garantizaban un buen pasar material. Como sintetiza Bermejo, especies caballares y animales cárnicos, metales nobles y monedas y,

²⁹ J.L. Bermejo Cabrero: “Dos ordenamientos de Enrique II sobre sacas”, *Cuadernos de Historia del Derecho* 5 (1998) pp. 271-280, con precisiones en torno a la verdadera naturaleza de estos textos.

³⁰ *Extracto de leyes y autos de la Recopilación*. Tomo IV. *Contiene las Leyes y Autos de los libros sexto y séptimo*. Formado por el Lic. D. Juan de la Reguera Valdelomar... Con privilegio. Madrid: Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, Año de 1799, pp. 194ss.

³¹ “Otrosy a lo que nos dixieron que nos pedien por merçed que mandássemos que nos ouiesen ssaca de ganados nin de pan nin de cavallos, para llevar ffuera de los nuestro rregnos a otras partes, por quanto se destruyría la tierra por ello”, J.L. Bermejo Cabrero, *op. cit.*, p. 273.

finalmente, pan y legumbres³². La legislación señalada fue complementada al año siguiente, extendiendo la protección establecida a mulos, mulas, muletos y muletas. Posteriormente, Juan I refundiría esta legislación, en el *Ordenamiento de sacas hecho en las Cortes de Guadalajara del año de 1390*, dándole mejor apariencia jurídica y extendiendo la protección propia del estatuto de las *cosas vedadas* al vino³³. Seguidamente, se insistió en ella en 1404, y en las Pragmáticas de 1376 y 1479.

Era una protección patrimonial acorde con el pulso bélico de la monarquía, que llegaba, por lo demás, al punto de prohibir, en ese espacio físicamente delimitado (“las doce leguas de los mojones”), la venta, donación, cambio o herencia de bestias caballares o mulares, so pena de perderlas, así como la mitad del conjunto de sus bienes, y morir por ello. Tales limitaciones afectaban también a los extranjeros, de tal manera que la única posibilidad de adquirir una montura en ese espacio era la adquisición por comprador abonado, y ante el alcalde del lugar o escribano nombrado por el alcalde de sacas, ante testigos. Esta disposición también se contuvo en los referidos instrumentos legales, y fue reiterada en 1534. Asimismo, quedaron obligados al registro de los equinos introducidos en el reino de Castilla, que implicaba la expedición de una autorización temporal de permanencia en los reinos de tres meses, pasados los cuales el extranjero se exponía a la requisa de la bestia³⁴. No obstante, tan detallada reglamentación tuvo excepciones, dado que los romeros podrían sacar sin impedimentos los trotones y hacas no nacidos en Castilla.

En la introducción de tales medidas influyó, sin duda alguna, la posesión por parte del rey de una clara conciencia patrimonial, puesto que los requisitos para la posesión de una montura eran más exigentes conforme mayor fuera la proximidad del individuo a los bordes del reino, al límite de ese espacio de continuidad cortesana vehiculado por la Cámara Real. Esto explica que la referida legislación eximiese de tan rígidas estipulaciones a los vecinos y moradores más acá de esas doce leguas liminares, dado que el interés residía en dificultar la potencial pérdida de riqueza entrañada por la salida de monturas – entre otras *cosas vedadas*-, acrecentado exponencialmente en ese espacio lindante con los reinos limítrofes³⁵.

No obstante, el perímetro restringido representado por las indicadas doce leguas no sólo afectaba al ganado caballar, sino que también lo hacía al vacuno, ovejuno, cabrío y porcino. Los ganados que pastasen en él serían registrados a la

³² *Ibidem*, p. 274.

³³ *Ibidem*, pp. 275-276.

³⁴ Cuadernos de 1377, 1390 y 1404, *Extracto...*, p. 194.

³⁵ *Ibidem*, p. 195.

entrada y a la salida de la indicada franja, si bien la obligatoriedad del registro de propiedad de los mismos era obligación vigente dentro y fuera de ella, conforme a lo estipulado en 1404³⁶.

La continuidad del espacio cortesano, señalada por la expansión de la Cámara Real y el protagonismo del Consejo Real en tal prolongación, a modo de aparato horizontal integrador, se percibe en el hecho de que, una vez registrados por los alcaldes y escribanos de sacas tanto los ganados entrados en el perímetro liminar de las doce leguas como los sacados a pastar a otros reinos, debían enviar al Consejo testimonio anual de los registros indicados, para certificar la ausencia de fraude, conforme a Pragmática de 1552³⁷. Los cuadernos de leyes de 1390 y 1404 referían, asimismo, la existencia de un contorno de veinte leguas hasta los mojones exteriores de los reinos en que era obligatorio vender los ganados a hombres naturales, conocidos y abonados³⁸.

Como se aprecia, la reglamentación caballar tenía una clara dimensión espacial. En 1501, los vecinos de la ciudad de Murcia fueron obligados a dar fianzas y garantías ante la justicia de la ciudad, de volver a Castilla con aquellas bestias con las que saliesen al Reino de Aragón³⁹. Además, en ese espacio de índole cortesana, se atribuía a porciones del mismo una intervención superior en el objeto administrativo perseguido, en función, en este caso, de sus condiciones objetivas en relación con el mismo. La reglamentación articulada en la Cámara regia propició que Andalucía adquiriese el rango de reserva de la pureza racial equina, al prohibirse de forma preventiva la posesión de garañones a partir de la línea señalada por el Tajo y, al tiempo, sacar yeguas para Castilla⁴⁰. Hasta que la urgencia de la materia propició un claro solapamiento de los respectivos canales de Consejo y Cámara, al que me referiré, parece que, en lo relativo a la política caballar, esta última tendió a intervenir en los límites del referido espacio de matriz cortesana, y el primero lo hizo en su interior, reparto en el que había mucho de coherencia administrativa, conforme a la tendencia de transmisión extendida nacida en la Cámara.

Las disposiciones relativas a la cría caballar publicadas durante los reinados de Carlos V y Felipe II no diferían en gran medida de las de los siglos precedentes, y continuaron articulando el régimen caballar en el señalado espacio. Las Cortes de 1462, y una Pragmática de 1492 reiteraron la prohibición de echar garañón a yegua en Andalucía, Murcia, y todas las poblaciones hasta el

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*, pp. 198-199.

³⁸ *Ibidem*, pp. 199-200.

³⁹ *Ibidem*, pp. 195-196.

⁴⁰ *Libro de albeytería, op.cit.*, p. 16.

Tajo; estas podrían ser sólo cubiertas con caballos de buena casta, supervisados por la justicia municipal, para lo que fueron nombrados veedores⁴¹. En línea con esta legislación restrictiva, en 1556 se establecieron requisitos particulares para la salida de yeguas de Andalucía a Castilla. Para ello, sería necesario testimonio del corregidor del lugar de destino, de que el comprador poseía buen caballo de casta; una vez trasladada, la yegua debía ser registrada ante el mismo corregidor, y la autorización para una nueva venta tendría una moratoria de dos años, que debería ser realizada siempre a dueño de caballo con los indicados requerimientos de raza. Por su parte, las yeguas menores de marca, no buenas para cría, podrían venderse libremente, con licencia escrita de la justicia y dos regidores. Y se añadían, además, privilegios para que los naturales se dispusiesen a poseer yeguas de casta y se comprometiesen en la cría caballar. En este sentido, el dueño de 12 o más yeguas *de vientre* que las hubiese tenido tres años seguidos no podría ser preso por deudas contraídas en ese periodo, salvo si tocaban a rentas reales. Igualmente, no se le podría exigir trigo, cebada, ni otros bastimentos ni bagajes para la provisión de armadas y galeras, ni para otro efecto real. Tampoco podría ser nombrado tutor o curador de menores, o ejercer oficios gravosos que solían representar mucha mayor entrega que retribución o reconocimiento, caso de los de mayordomo de Propios y Pósito, o cobrador de bulas. A su vez, si los dueños eran caballeros de cuantía, quedarían eximidos de participar en los alardes, con tal de que tuviesen armas y caballo, y los registrasen anualmente. En las eventuales denuncias contra dueños de yeguas y potros, o sus yegüeros y criados, conocerían las justicias ordinarias acompañadas de dos regidores, y no podrían ser presos los últimos, si ellos o sus señores daban fianzas de pagar la pena y daños en que fueren condenados. Nuevamente, la función del Consejo Real era esencial a este respecto, dado que se confió a su capacidad reglamentaria el reconocimiento de ventajas para los criadores de caballos, garantizado en el medio local por los corregidores⁴².

Pero en el reinado de Felipe II las referidas disposiciones de cría caballar fueron perfeccionadas, especialmente en el plano punitivo, hecho que, una vez más, permite plantearse la verdadera efectividad de las disposiciones anteriores. Las penas establecidas en estas últimas (pérdida del garañón y 10.000 mrs. de pena para la Cámara por tercios, a pagar por su dueño y el de la Cámara que

⁴¹ *Extracto*..., pp. 170-171.

⁴² El *Extracto* resume: "... y en el Real Consejo se den provisiones para que las justicias y proveedores de Armadas guarden en lo que les toca, los privilegios y órdenes a favor de los criadores de caballos y no contravengan en modo alguno, haciéndose cargo en las residencias a las justicias que los quebranten, y castigando a los contraventores" (pp. 174-177).

cubriera; y pérdida de las yeguas y 10.000 mrs. para la Cámara, juez y denunciador, más otros 10.000 adicionales por reincidir), fueron elevadas a 20.000 mrs. y dos años de destierro, penas dobladas la segunda vez, y elevadas a la pérdida de la mitad de sus bienes y destierro perpetuo la tercera. Todas ellas serían aplicadas por terceras partes al denunciador, juez, Cámara y Fisco. Además, la preocupación por la cría se extendió a nuevos espacios, puesto que sería de aplicación desde la Cordillera Central hasta el Tajo y en una zona que comprendía Extremadura hasta Ciudad Rodrigo, "... aunque sean de la parte acá de Tajo". En tan amplio espacio, se estableció el registro obligatorio de los equinos, con propósito de conservar y aumentar su casta. La veracidad del registro y el cumplimiento de las disposiciones sería comprobada el día de San Miguel, o el que fijase el corregidor, de cuya residencia formaría parte este punto⁴³. A su vez, se propiciaron condiciones favorables para la reproducción de buenos ejemplares, encargando a los concejos de los lugares donde hubiese yeguas de cría la compra de un *padre* por cada 25 de ellas, a cuya costa y sustento contribuirían los dueños de las yeguas. El objetivo prioritario era conservar y aumentar la casta y cría de los caballos, y con este propósito el Corregidor nombraría dos comisarios especializados, se consultarían personas prácticas, y se formarían las Ordenanzas oportunas, sometidas a la aprobación última del Consejo.

Como se aprecia, la maduración de tal espacio territorial de índole cortesana propiciaba la asunción por los agentes jurisdiccionales regios, corregidores y Consejo, de una función gubernativa que, además de los puntos señalados, alcanzó a la localización de aquellos términos y baldíos más adecuados para el pasto y cría de los caballos, cuya explotación final requeriría la preceptiva licencia del Consejo. Además, la cría caballar fue favorecida

⁴³ Aunque parece que la materia no era mencionada explícitamente en las comisiones libradas para los jueces de residencia. En el título de juez de residencia que aparece como modelo en la obra *Dirección de Secretarios de Señores, y las materias, cuydados y obligaciones que les tocan, con las virudes de que se han de preciar, estilo y orden del despacho y expediente...*, por Gabriel Pérez del Barrio Angulo... Año 1613... En Madrid, por Alonso Martín de Balboa, ff. 214r.-215r., se encarga al juez que revisase la labor jurisdiccional de su predecesor, pero también "... si el dicho Corregidor ha visitado los términos y mojones, y mirado por la conservación de los montes, caça y pesca, guarda y cumplimiento de las premáticas de Su Magestad, reparado caminos, puentes y calçadas, y acudido a lo que más devía conforme los capítulos de corregidores...", ff. 214r.-215r. (la provisión completa en ff. 214r.-215v.). El fomento caballar, conforme a lo regulado, debe incluirse en el conjunto de las pragmáticas que debían ser atendidas por el corregidor.

mediante la exención de ciertos tributos y cargas para criadores y dueños de yeguas⁴⁴.

La protección del espacio cortesano. El concepto de ‘cosas vedadas’ y el alcalde de sacas

A falta de una definición concreta en la literatura legal -como indica Pino Abad-, la definición más expresa correspondió a Hevia Bolaños: “Cosas vedadas, son las prohibidas de sacar de un pueblo o reyno a otro, y meterlas en él, como consta de las leyes de un título de la Recopilación que sobre esto trata. Y antes de ellas avía esta prohibición por ley de Partida”⁴⁵. Como se aprecia, el autor dio pista de la continuidad temporal en que se enmarcaba esa otra continuidad espacial por la extensión horizontal de la Cámara. Las *cosas vedadas* (cueros, caballos, oro y plata, moneda, cereales, etc.) tenían un sentido ambivalente que ayudaba a percibir ese espacio al que me refiero. No sólo constituían un límite, sino que generaban en su interior un conjunto de penas que alimentaba económicamente el órgano real a través del que se gestionaba ese espacio⁴⁶, de cuya expansión resultaba el mismo.

En lo relativo a los caballos, la rotunda prohibición de saca establecida mediado el siglo XIV se mantuvo sustancialmente vigente durante los siglos modernos, desde su repetición como Pragmática el 15 de octubre de 1499, y aparecía en la *Recopilación* de leyes de 1640:

“Tenemos por bien, que qualquiera que sacare caballos, o rocín, o yegua, o potro fuera de nuestros reynos, quier sea alcayde, o merino, u otro oficial, o otra qualquier persona de qualquier calidad o condición que sea, pierda lo que de lo susodicho sacare, y todos sus bienes, y muera por ello. Y lo mismo aya lugar sacando mula, o mulo o muletos o muletas grandes, o pequeñas, assí de freno como de albarda y cerriles: y que la dicha pena aya lugar contra el que sacare, aunque sea caballero o escudero, hijodalgo. Y mandamos que si los dichos alcaldes

⁴⁴ Los criadores no pagarían alcabala de la primera venta que hicieren de cualquier potro cerril o ensillado; por su parte, el dueño de tres o cuatro yeguas de vientre sería libre y exento de toda clase de alojamiento, y no podría hacerse ejecución en ellas por deuda alguna a la Hacienda Real. Disposición de 1562, en *Extracto...*, pp. 171-174.

⁴⁵ *Labyrintho de comercio terrestre y naval...*, Autor Ioan de Hevia Volaños, natural de la ciudad de Oviedo en el Principado de Asturias Reynos de España... Con privilegio, en Lima. Por Francisco del Canto, natural Medina del Campo. Año de 1617, p. 678. Remitía al libro sexto, título XVIII, leyes XII y XXVI, en *Segunda parte de las leyes del Reyno. Libro quinto*. En Madrid, Por Diego Díaz de la Carrera, [1640].

⁴⁶ S. de Dios, *op. cit.*, p. 108.

y personas susodichas sacaren los dichos cavallos y bestias agenos para los poner a salvo a los que los sacan y a los sacadores, que ayan la misma pena de muerte y perdimiento de sus bienes”⁴⁷.

La sucesión reglamentaria que se apreciaba cuando se estudia la política caballar de Consejo y Cámara⁴⁸ permitiría pensar en la existencia de supuestos desatendidos por las distintas disposiciones. Aunque ello en gran medida fue así, su letra delimitó una franja perimetral pegada a la linde del reino que revelaba no sólo el deseo de penalizar la saca de cosas vedadas, sino la pericia jurídica de imposibilitar físicamente su comisión -a no ser que hubiese sido por vía aérea-, cobijado el autor en el vacío legal. En este sentido, la fijación de un perímetro liminar de 12 leguas (para el caso de aparejos de guerra) y de una o dos leguas para el resto de cosas vedadas -tras alcanzar una distancia mucho mayor-, reflejaba esa intención⁴⁹.

La concreción del espacio cortesano era causa y consecuencia de la extensión y eventual superposición de perímetros y, en este caso, la definición de la frontera no fue una excepción. Los alcaldes de sacas, establecidos para vigilar el tráfico mercantil y las mercancías prohibidas para la exportación, mostraron desde un principio un celo excesivo en sus funciones que obligó a ordenar su actuación sólo en la proximidad de las fronteras. En 1268, durante el reinado de un monarca fundamental como vemos para la delimitación y protección del espacio extenso cortesano, como fue Alfonso X -quien significativamente asentó en las *Partidas* las bases formales y jurídicas de esta continuidad-, fueron establecidas unas zonas de vigilancia, y Pedro I hizo un nuevo reparto de zonas de frontera en 1351⁵⁰. En lo relativo a los caballos, como ya hemos referido, las bestias debían ser registradas anualmente en un perímetro de diez, doce y veinte leguas respecto a la raya de Aragón, si bien parece que este requisito era incumplido en las aduanas de Vitoria, Salvatierra, Ciria y

⁴⁷ Ley XII, título XVIII, libro sexto, *Segunda parte de las leyes del reyno...* En Madrid, por Diego Díaz de la Carrera.

⁴⁸ Resumida en José María Sánchez Benito: *La Corona de Castilla y el comercio exterior: estudio del intervencionismo monárquico sobre los tráficos mercantiles en la Baja Edad Media*, Madrid: Ciencia 3, 1993, pp. 58-62.

⁴⁹ *Curia Philípica*. El segundo tomo distribuido en tres libros, trata de la mercancía y contratación de tierra y mar... su autor, Juan de Hevia Bolaños..., Valladolid: Lex Nova, 1989 (ed. facsímil de la de Madrid: En la oficina de Ramón Ruiz, 1797), lib. III, cap. VI, nº 26, p. 485.

⁵⁰ M.Á. Ladero Quesada: *Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)*, Madrid: Universidad Complutense, 1993, pp. 160-161.

Medinaceli⁵¹. Tan severa disposición fue suavizada en 1502, al establecerse que el ganado equino de los lugares situados a doce leguas de la frontera fuese inscrito una única vez en la aduana. Desde luego, entre las cosas vedadas, el caballo era de los bienes más atractivos para el contrabando, y el propio alcalde mayor de sacas del obispado de Osma fue condenado en 1520 por ser cómplice en un negocio de saca ilegal de caballos⁵².

Conforme a las atribuciones que ejercían, los alcaldes de sacas –cuya aparición es situada por Pino Abad entre 1322 y 1329⁵³–, fueron con razón llamados “jueces del resguardo nacional”⁵⁴, entre los que se encontraban los caballos. Sus competencias fueron definidas por Juan II, consistentes fundamentalmente en impedir la salida de los reinos de los productos prohibidos y verificar que transitaban sólo por los caminos legales⁵⁵. Su espacio de actuación tendió a coincidir con ese cinturón perimetral al que me refería. En las Cortes de Toledo de 1462 se acordó que los alcaldes permaneciesen físicamente en los pasos fronterizos y dos leguas alrededor, y que en caso de no poder hacerlo designasen guardas en su nombre. Se dio una clara función protectora de los límites del reino, coordinada por el Consejo y ejercida sobre el terreno por los alcaldes de sacas, como indica el hecho de que estaban autorizados a poner lugartenientes que debían ser reconocidos y aprobados por el Consejo⁵⁶. Sin embargo, no solían hacerlo, por lo que se decidió que el Consejo les tomase residencia cada dos años, para saber, entre el resto de puntos propios de su oficio, si cumplían este, por Pragmática de 11 de marzo de 1552⁵⁷.

Asimismo, en 1602 el licenciado Gonzalo Pérez de Valenzuela, alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid, se presentó en Guipúzcoa –donde la

⁵¹ M. Asenjo González: *op. cit.*, p. 288.

⁵² *Ibidem*, pp. 305 y 307.

⁵³ M. Pino Abad: *op. cit.*, p. 52. Sobre los alcaldes de sacas, pp. 51-61. Asimismo, J.M. Sánchez Benito: *op. cit.*, pp. 106-118.

⁵⁴ P. Gorosabel: *Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa*, Libro IX, *Del ramo legislativo y judicial*, Cap. V, *De la jurisdicción del resguardo*, Sección I, *De la alcaldía de sacas* (p. 326), <http://www.ingeba.org/klasikoa/noticia/not09/n5326337.htm>.

⁵⁵ M. Pino Abad: *op. cit.*, p. 54; I. Montes Romero-Camacho: “Las instituciones de la saca en la Sevilla del siglo XV. Aproximación al estudio de la organización institucional del comercio exterior de la Corona de Castilla al final de la Edad Media”, *Historia. Instituciones. Documentos* 31 (2004) pp., p. 421; J.M. Sánchez Benito: *La Corona de Castilla y el comercio exterior. Estudio del intervencionismo monárquico sobre los tráficó mercantiles en la Baja Edad Media*, Editorial Ciencia, Madrid, 1993, pp. 124-126; Henry Lapeyre: *El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1981, p. 34.

⁵⁶ M. Pino Abad, *op. cit.*, p. 55.

⁵⁷ Ley LVI, título XVIII, libro VI. *Segunda parte de las leyes del reyno*, *op. cit.*

existencia del alcalde de sacas era entendida como un privilegio- para proceder contra los que sacaban oro y plata. La provincia defendió la exclusividad del alcalde en este ámbito, y obtuvo del Consejo provisión, el 31 de diciembre, para que las causas fuesen remitidas al alcalde de sacas por tocarle privativamente su conocimiento⁵⁸. Tan extendida era la responsabilidad del Consejo Real en la armonía local de tal espacio cortesano, que su dimisión en este terreno, consciente o inconsciente, daba lugar a largas etapas de indefinición o incluso abierto litigio jurisdiccional. En lo relativo al alcalde de sacas de Guipúzcoa, el Consejo dictaminó en su favor respecto al Capitán General por sendas Reales Provisiones de 20 de mayo y 19 de junio de 1553, y 12 de octubre de 1593, y respecto al corregidor, de 31 de octubre de 1602⁵⁹. Respecto a los entes locales. Fuenterrabía pretendió que sus alcaldes ordinarios ejerciesen el resguardo de las cosas vedadas en el paso de Behobia, aldea de Irún, propósito que la Provincia consideraba contrario a la concesión de la alcaldía de sacas a la provincia recibido de los Reyes Católicos. El caso fue ejemplo de las referidas consecuencias que podía traer la inacción del Consejo, que, por otro lado, podía interpretarse como respuesta implícita a la parte que pretendía alterar el *status quo*, como era la villa de Fuenterrabía. En represalia, la Provincia le privó del turno decenal para elección de alcalde de sacas, estado anómalo que se conservó durante más de sesenta años⁶⁰. El papel del Consejo como tutor de la armonía fronteriza en el espacio vasco también se apreció en sendas provisiones reales, suscritas el 12 de mayo de 1534 y el 4 de abril de 1536, que eximían a los naturales de Guipúzcoa de dar fianzas ante el alcalde de sacas de Vitoria por los caballos y bestias que llevasen desde Castilla⁶¹. La decisión podía interpretarse como prueba de la continuidad territorial de la Cámara castellana hasta el límite con el espacio que, presumo, acogía otro proceso similar, la monarquía francesa. El círculo se cerraba si consideramos, además, que las infracciones de esta disposición eran penadas con 10.000 mrs. de multa para la Cámara Real, esto es, representaban una contribución (teórica, dado el siempre complicado cobro de las mismas) al mantenimiento económico de ese espacio continuo.

Por lo demás, no fue el único punto del espacio liminar cortesano en el que se dieron roces que afectaron a los alcaldes de sacas. Hubo conflictos con los arrendadores de diezmos y aduanas, puesto que, mientras los primeros trataban de impedir la salida de mercancías vedadas, los segundos estaban interesados en que pasase a los reinos vecinos el mayor volumen de mercancías posible, para

⁵⁸ P. Gorosabel: *op. cit.*, p. 332.

⁵⁹ M. Pino Abad: *op. cit.*, p. 60.

⁶⁰ P. Gorosabel: *op. cit.*, pp. 334-335.

⁶¹ M. Pino Abad: *op. cit.*, p. 84.

así obtener mayores ingresos del cobro de derechos aduaneros. Por su parte, los alcaldes de sacas denunciaron la complicidad de los arrendadores con los contrabandistas, dado que los *diezmeros* por ellos nombrados colocaban las tablas de las aduanas en los lugares más inmediatamente próximos a la frontera, para que desde allí pasasen directamente al reino vecino sin dar oportunidad a los alcaldes de sacas de examinar las mercancías que transportaban. Claro que el proceder de estos no era mucho más honesto, puesto que en el trayecto hasta la frontera trataban de examinar las mercancías de los contrabandistas, pero con el único propósito de exigirles algún dinero a cambio de dejarles continuar su viaje⁶².

Con fundamento en sus atribuciones, puede afirmarse que la potestad del alcalde de sacas era omnímoda, de manera que las justicias locales debían estar sujetas a sus mandatos, y su escribano lo era en virtud de su propio nombramiento, por mucho que otros tuviesen privilegio real o fuesen del concejo, conforme indicaban los cuadernos de leyes de 1390 y 1404. Pese a que su importancia fue declinante, los poderosos recurrían a mediaciones para conseguir una actitud favorable por parte de los alcaldes de sacas en el uso de sus funciones, que en líneas generales ejercían con un marcado sentido de protección patrimonial. En la obra de Gabriel Pérez del Barrio Angulo *Dirección de secretarios de señores*, una regla de conducta para los mismos que incluía un compendio de formularios y cortesías, se contiene una de tales cartas de mediación. La obra estaba dedicada a Don Juan Andrés Hurtado de Mendoza, V marqués de Cañete, quien acumulaba una cumplida serie de cargos y distinciones: montero mayor del rey, señor de la villa de Algete, guarda mayor de la ciudad de Cuenca y tesorero de la Casa de la Moneda de ella, capitán de gente de armas de las guardas de Castilla y alcalde mayor él mismo de sacas y cosas vedadas entre los reinos de Castilla, Aragón y Valencia “por el rey nuestro señor”. Esta última apostilla, “por el rey”, en lugar de “en nombre de” reflejaba la inmediatez a la persona real propia de la posesión de un patrimonio: su dependencia directa, sin intermediarios, aunque sí con delegados encargados de su gestión como el alcalde de sacas. Probablemente, la carta transcrita por Pérez del Barrio debió ser recibida por su protector para mitigar su resistencia al paso de ciertas mercancías vedadas, aunque quizá el corresponsal desconocía que la

⁶² M. Diago Hernando: “Relaciones comerciales entre Castilla y Aragón en el ámbito fronterizo soriano a fines de la Edad Media”, *Aragon en la Edad Media* 9 (1991) pp. 179-202, p. 183, apud M. Pino Abad: op. cit., p. 71. La implantación de este sistema impositivo en tiempo de Alfonso X, en M.Á. Ladero Quesada: *Fiscalidad y poder real en Castilla*, op. cit., pp. 156-158.

licencia que solicitaba era atribución exclusiva del rey⁶³. En cualquier caso, si se recurría de este modo a los alcaldes de saca, en un momento en que su jurisdicción estaba ya mediatizada por la figura del corregidor, sirva para deducir su importancia previa⁶⁴. El capítulo LII de los dirigidos en 1500 a los corregidores les encarecía la guarda de los puertos de su corregimiento, para que no se sacase ni moneda ni caballos, e indagar cada seis meses los responsables de la eventual saca de ambos bienes, que, como se aprecia, tenían importancia propia respecto al resto de cosas vedadas⁶⁵.

Sentido administrativo de la licencia. Las licencias de saca de cosas vedadas

Con mayor o menor claridad, la licencia es una figura administrativa visible en el desarrollo de la Historia de la Administración desde fecha muy temprana. Entre los numerosos ejemplos que cabría poner, la naturaleza, diversidad y alcance de las licencias y facultades reales era muy atendida por la literatura jurídica de orden sucesorio⁶⁶. Fundamentalmente, su función consistía en hacer lícito determinado acto, en atención o no a los requerimientos legales que lo regulaban, con las innumerables consecuencias de orden jurídico-político que ello implicaba. En revestir de legalidad o juridicidad un hecho objetivo, sentido

⁶³ *Dirección de secretarios de señores, y las materias, cuydados y obligaciones que les tocan...*, por Gabriel Pérez del Barrio Angulo, secretario del marqués de los Vélez, y alcaide de la fortaleza de su uilla de Librilla... Año 1613, Con Privilegio. En Madrid por Alonso Martín de Balboa, ff. 154v.-155r., “Que se dé licencia para sacar cosas vedadas”. “Son tan preciosas las cosas de curiosidad que se traen de esse reyno para nuestro adorno, que no solamente dan codicia para dessearlas sino voluntad y ánimo de yr a buscarlas por entre los mayores peligros: y assí no me maravillo de que aya tocado en esta codicia don N, el qual me dize se le han comprado N y como cosas prohibidas tiene necesidad de licencia de V. Ex. para sacarlas. La obligción que yo le tengo es tan grande como V. Ex. sabe: pero con la limitación que pide la que a U. Ex. devo reconocer eternamente. Suplico a V. Ex. le haga esta merced en lo que hubiere lugar, que la estimaré y tendré por muy propia de V. Ex. a quien guarde nuestro señor como desseo...”.

⁶⁴ M. Pino Abad, *op. cit.*, p. 73.

⁶⁵ B. González Alonso: *El Corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid: Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 311.

⁶⁶ Por ejemplo, el capítulo “De licentia et facultate regia, et an sit necessaria ante conditum maioratum, vel sufficiat si post”, en *Consilia B. Roderici Suárez Iuris Consulti celeberrimi, & Vallisoleitani Regii Senatus quondam Auditoris, post eius obitum inventa, & de novo in lucem edita, in gratiam iudicum, & advocatorum, cun índice rerum copiosisimo...* Matriti... Apud haeredes Joannis Íñiguez de Lequerica, Ex officina et expensis Licenciati Varez a Castro, Anno MDXCIX.

que se aprecia con toda claridad en el terreno lexicográfico⁶⁷. Consistía, y consiste, pues viene siendo evidente que las categorías administrativas actuales han ido madurando a lo largo de la historia, sin ser sustancialmente afectadas por sus límites convencionales. Como señala José Luis Carro, "... la administrativa es la primera función histórica de toda comunidad política [...], lo que es innegable es la existencia anterior de una función sociológicamente administrativa en cuyo cumplimiento se utilizaron una serie de técnicas que pasarán a manos de la Administración moderna enmarcadas, claro está, en la nueva realidad de la división de poderes y en la nueva concepción de la legalidad"⁶⁸. En el mundo moderno, como en la actualidad, una licencia implicaba el reconocimiento implícito o expreso de la potestad del confirente para concederla, por parte del beneficiario, y era expresión de la capacidad que creía tener el primero para hacerlo. Implicaba un ejercicio mutuo de reconocimiento de las atribuciones propias de la majestad real. Tan sólo a modo de ejemplo, cabe preguntarse si se puede aplicar a las licencias tramitadas en el ámbito ecuestre el sentido de remoción de los obstáculos para el libre ejercicio de cualquier actividad –definido por el alemán Otto Mayer-. En cuanto constituía acto administrativo que levantaba la prohibición previamente establecida por la norma de Policía –consistente esta en la rígida reglamentación que prohibía, *a priori*, la saca de caballos de los reinos-. Se restablecía así la libertad de iniciativa, aunque fuera contra el pago de cierta suma⁶⁹.

Como figura jurídica la licencia estaba tan desarrollada, casi desde el propio origen de una noción de lo administrativo, que afectaba a la gestión de un

⁶⁷ Así, en el *Lexicon ecclesiasticum latino hispanicum*...,... Authore F. Didaco Ximénez Arias, alcantarensi theologo, Ordinis Predicatorum... Anno 1613, Cum licentia, Barcinonae, Ex typographia Sebastiani a Cormellas, quien define "licentia" como "licencia o facultad para hazr o dexar de hazer algo... Aunq ordinariamente se toma en mala parte, por la soltura en mal hazer o dezir mal".

⁶⁸ Continúa Carro: "Se trata, eso sí, de echar mano de la historia no viéndola únicamente y exclusivamente como el conocimiento de un hecho o una serie de hechos, sino como base para hallar el verdadero significado de la realidad presente intentando seguir el larguísimo, atormentado y tormentoso itinerario de algunas instituciones que hoy desempeñan un papel central en el sistema de nuestra disciplina. Se trata, en efecto, de subrayar la necesidad de la historia entendida como *Dogmengeschichte* para el dominio intelectual de la realidad presente", J.L. Carro: "Policía y dominio eminente como técnicas de intervención en el Estado preconstitucional", *Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo* 29 (1981) pp. 287-305, p. 288. Inversamente, y con las obligadas prevenciones, destilar aquellas categorías administrativas que, resultado de una larga decantación, pueden contribuir a conocer el pasado.

⁶⁹ J.C. Laguna De Paz: *La autorización administrativa*, Cizur Menor: Thomson Civitas, 2006, pp. 117-118.

variado ramo de asuntos en un amplio número de Consejos y organismos, si bien por relación con el mundo del caballo aquí sólo me referiré a los Consejos Real y de Cámara. El Consejo concedía, entre otras muchas, licencias para imprimir libros; para que una Universidad tomase cantidades a censo; para simultanear cátedras; para la elección de alcalde de mar por cofradía de pescadores; para la venta de pan; para que los municipios impusiesen *sisa* sobre los consumos por los más variados motivos: como atender preparativos militares, luchar contra la peste, extinguir la langosta, reparar un puente, instalar un farol de señales marítimas, etc. Como se observa, en buena parte de los casos, autorizaciones para sacar provecho de otro de los bienes propios del patrimonio eminente del rey en ese espacio cortesano vehiculado por la Cámara, como era la moneda.

Por su parte, la Cámara de Castilla, emitía un variado abanico de licencias. Esa fue en buena medida la forma procedimental de ese ámbito directamente dependiente del rey, luego heredado por la Cámara, entendida, como señala Salustiano de Dios, en unos casos como dispensa y en otros como habilitación⁷⁰. A nuestros efectos, nos interesa destacar que esa lógica de extensión espacial nacida en la Cámara y plasmada en el territorio necesitaba de fórmulas administrativas de gestión entre las que destacó la licencia. He aquí la razón de que gran parte de las licencias emanadas de la Cámara, entendida como el ente de gestión mediada de la gracia, tengan un contenido territorial: licencia para cerrar fincas, para autorizar a una persona a entrar en el reino, para vender heredades con litigio pendiente, o para sacar pan o granos. Derechos considerados propios del rey, una *regalia*, causa o consecuencia del referido dominio eminente, pero fundada en esa semántica expansiva. Será la tipología de las licencias contenida en los famosos formularios documentales elaborados en la Corte desde antes de la propia definición de la Cámara, sobre los que ha trabajado De Dios en la ya citada obra, entre otros autores⁷¹. Pero también de las citadas relaciones de competencias de la Cámara elaboradas durante los siglos XVI y XVII, conforme se procedía a la reforma institucionalizadora de la Cámara como Consejo.

⁷⁰ S. de Dios, *op. cit.*, pp. 342-347.

⁷¹ Biblioteca del Palacio Real de Madrid, ms. 2988, *Formulario de cartas y mercedes de Don Juan el II*, comentado en Salustiano de DIOS, *op. cit.*, pp. 106-113 y en F. Arribas Arranz: *Un formulario documental del Siglo XIV de la Cancillería Real castellana*, Universidad de Valladolid, 1964; L. Cuesta Gutiérrez: *Formulario noarial castellano del Siglo XV*, Madrid: 1948; Fernando Díaz De Toledo: *atr., Las notas del relator con otros añadidos* Burgos, 1931.

Esto, al margen de la difícil distinción de ámbitos gestionados por el Consejo y la Cámara. En la citada “Tabla de lo que se despacha en Cons[ej]o de Cámara” se menciona como atribución de la Cámara la concesión de licencias “para que un conçejo pueda açensuar los propios hasta en cierta cantidad para cossas necesarias a la república”⁷², pero era una de las cuestiones atendidas por el Consejo Real en *consejo pleno* y en las *Consultas de los Viernes* celebradas con el rey, de lo que hay abundantes ejemplos⁷³. Pero en cualquier caso, al margen de la manifiesta identificación y superposición de cauces entre la Cámara y el Consejo, las licencias concedidas por la primera se distinguen por una intervención más explícita del rey en la que se manifiesta una de sus características más propia: se distinguen por moverse en el ámbito de la gracia real, señalada por su variabilidad y volubilidad: sólo en casos excepcionales se conceden por el plazo o en los términos demandados por el solicitante. Además, la institucionalización del Consejo de Cámara y la consolidación de su dimensión meramente administrativa, más allá de lo *gracioso*, fueron manifestaciones paralelas. Pero pienso que las licencias tramitadas por el Consejo Real no admitían tales alteraciones, se concedían o no. Ni respondían a la satisfacción de la justicia distributiva, dar a cada uno según lo merece, ni su concesión dependía de la gracia del rey, sino del cumplimiento a juicio del Consejo Real de criterios que hacían insoslayable o imperativa la concesión. En el caso de las licencias de impresión, por ejemplo, la “utilidad y provecho”, aspecto en el que ha profundizado García Martín⁷⁴. Es decir, puede aventurarse que el Consejo Real concedía licencias conforme a la ley, y el de Cámara, con

⁷² IVDJ, e. 90, c. 129, n° 533.

⁷³ Entre los numerosos ejemplos que podrían ponerse: “58. La uilla de Pedroche pidió lic[enci]ª para tomar prestados a censo dos myll ducados para pagar deudas que a hecho en enpedrar calles y seguir pleytos y hazer carniçerías. Diose proui[s]ión de dilig[enci]as de las quales y del pareçer del juez resulta quel Concejo a hecho muchos gastos en las cosas que refiere y que deue cantidad de mrs. dello y de gastos echos en los pleytos que trata en Q[onsej]º y en Gr[ana]da y en otras p[ar]tes sobre términos, ympusiciones y otras cosas algunos de los quales le son muy ynportantes al concejo estan suspensos por falta de dineros y q se le deue dar licen[ci]a para tomar a censo los dos myll du[cad]os. El juez en su parecer dize lo mysmo y que la d[ic]ha liçen[ci]a se le d[e]ue dar con que los oficiales del concejo se obliguen de redymir y quitar el censo dentro de seis años y que haya depositario del dinero y se gaste por libranças del regim[y]en to y no de otra manera. Uisto en Q[onsej]o se mandó poner en consulta con pareçer que se le dé lic[enci]ª para q tomen llanam[en]te los dos mill dos a censo sin q se obliguen los oficiales del concejo como lo refiere el pareçer del juez. Ss. Fuenmyor, U[ill]afañe, R[odrig]º Báza[ue]z, Auedillo, Luis Tello, “Consulta que hizo en ausencia de Su Magtt el Sor Doctor Molina en diez y seis de henero de 1579”, Archivo Histórico Nacional (AHN). Consejos, leg. 51.362.

⁷⁴ J. García Martín: *El juzgado de imprentas y la utilidad publica: cuerpo y alma de una “monarquía vicarial”*, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2002.

excepción, restricción o vacío de la ley, siempre supeditada a la libertad de la gracia real.

Es precisamente en este terreno de la gracia real en el que se sitúa con toda claridad la concesión de licencias de saca de caballos, y el resto de cosas vedadas⁷⁵. En lo relativo a las licencias de saca de cosas vedadas, su estudio ha sido abordado en excelentes trabajos de orden jurídico⁷⁶, pero no se ha reparado, al menos en su justa medida, en su significado como manifestación de uno de los aspectos esenciales de la majestad real, como era la gracia. Tiene toda una lógica íntima el hecho de que, si se definía un espacio cortesano, el rey ejercía sobre él un *dominio eminente*, y se sometía tal espacio a protección, la autorización para hacer detracciones patrimoniales de ese ámbito dependiera exclusivamente de la voluntad arbitraria del monarca.

El modo en que describen las citadas relaciones de atribuciones de la Cámara aquellas relativas a la saca de cosas vedadas, reflejaba un claro sentido de protección patrimonial. El mismo que era visible en las dependencias en las que permanecía el rey, extendido hasta los mismos confines del espacio circundante. De hecho, la propia cobertura jurídica de la expedición de esta clase de licencias de saca, ofrecida en la *Partida III*, ley XX, vinculaba la propia Cámara Real con los confines de los reinos indicados en la propia licencia, mediante la figura de los porteros, y asentaba requerimientos formales que denotaban un sentido protector del patrimonio regio, pues debían indicar si eran valederas para una sólo ocasión o un periodo concreto⁷⁷. Si bien en este tipo de licencias existía una amplia gradación. Las licencias de saca de cueros, vendibles, influían según su número en el precio final obtenido por su venta por el beneficiario de la licencia, y solían concederse a servidores de las casas reales o conventos pobres⁷⁸. Las sacas de trigo dejaban apreciar claramente ese

⁷⁵ “Las mercaderías y cosas regularmente se pueden sacar y meter de un pueblo a otro, dentro del reyno, salvo las prohibidas, sin que se pueda vedar aunque sea en tierra de señorío, sin expressa y especial licencia real, según unas leyes de Recopilación”, *Labyrintho de comercio terrestre y naval...*, op. cit., p. 678.

⁷⁶ M. Pino Abad, op. cit.

⁷⁷ Tales licencias debían hacerse en pergamino, y ordenarse “Del rey a los porteros et a todos quantos la carta vieren cómo les face saber que la manda a fulan que saque del regno tanto caballos o otras cosas de las vedadas, et que defiende que ninguno non se osado de contrallarlos por sacamiento del regno, ca qualquier que lo ficiere a él et a cuánto que hobiere se tornarie por ello...”, J. M. Sánchez Benito: *La Corona de Castilla y el comercio exterior*, op. cit., p. 71.

⁷⁸ “Suelense conçeder por la Cámara licençias de sacas de cueros uacvnos de los q uienen de las Indias, y la liçencia de cada cuero suele ualer dos rales con alça y baxa, según la dem[an]da ay destas liçençias, pero si la Cámara conçeде muchas baxa tanto el preçio que no ay prouecho dellas, y teniendo la mano en darlas suele svuir el d[ic]ho preçio, y alguna

propósito curador del espacio cortesano, puesto que se concedían, siempre en beneficio de reinos propios o aliados, cuando la cosecha era abundante en Castilla⁷⁹. Mientras que, en el mismo sentido, las sacas de dinero y caballos eran excepcionales, reservadas a grandes dignidades en servicio en otros reinos de la Monarquía o ante otros príncipes, de manera que, con propósito de subrayar esa extrema singularidad, solían relacionarse explícita o implícitamente con el ejercicio de tales funciones, como si constituyeran una obligación retributiva del príncipe que no hubiera podido cumplir por otros medios: “También se piden sacas de dinero y de cauallos para algunos señores que están siruiendo de uireyes y para otras personas y ministros que [e]stén ocupados fuera destos rey[n]os en seruicio de Su Md, y se conçeden con mucha limitación, y ten[ien]do respecto a lo que se a hecho con sus antecesores”⁸⁰. Era este un rasgo de continuidad, dado que Sánchez Benito define como receptores de estas licencias en el último cuarto del siglo XV a “altos funcionarios, nobles y eclesiásticos”⁸¹. Para este autor, las licencias de saca —entre ellas las de caballos— eran un instrumento diplomático y político para los monarcas, además de económico, dado que devengaban cantidades no desdeñables para las arcas reales en concepto de impuestos, tasas y derechos de cancillería⁸², hecho que no entra en conflicto con la dimensión mercedaria de estas licencias, dado que sólo significaría que la gracia real era puesta en almoneda. Pero ello fue compatible con una intención general restrictiva y limitadora respecto a estas autorizaciones. La concesión de las mismas fue en disminución, especialmente en lo relativo a los caballos, y en adelante las relaciones de materias

uez a llegado a 3 r[eale]s y más, y con estas liçençias se haze m[e]r[ce]d a los criados de Su M[ajesta]d y a otras pers[on]as que siruen y a algunos conu[en]tos pobres. Y las çédulas se despachan en sus caueças para que ellos o la pers[on]a q[ue] tviere su poder puedan sacar la cant[ida]d de cueros q[ue] la çédula dize, la qual dura por t[iem]po de un año, y q[uan]do se pasa el d[i]c[h]o año sin aprouecharse della piden prorrog[aci]ón y el Cons[ej] la da si le parece, pero es ordinario prorrogarlas por otro año, o q[uan]do menos por seis meses”, IVDJ, e. 90, c. 129, n° 524bis, “Copia de la Rel[aci]ón que yo dí a los ss[eñor]es Bórquez (sic), Álu[ar]o de Uenauides, y S[ecretari]o Ju° Ruyz de U[elas]co de los neg[oci]os q[ue] se tratan en la Cám[ar]a y de algunas aduertencias en ellos”. Vista la identidad de los destinatarios, no es descabellado fechar este escrito en los primeros meses de 1603.

⁷⁹ “Quando la cosecha del trigo es abundante en estos rey[n]os y falta en otros aliados y confederados dellos, se suelen dar licencias de sacas de trigo por la misma orden q[ue] se da la de los cueros, inform[an]do prim[er]o el consejo de la cosecha, y de lo q[ue] valdría la liçençia de saca de cada fanega” (IVDJ, *ibidem*).

⁸⁰ IVDJ, e. 90, c. 129, n° 524bis, *ibidem*.

⁸¹ Este autor ofrece una distribución porcentual de licencias de saca según el tipo de beneficiario, durante el último cuarto del siglo XV, J.M. Sánchez Benito: *La Corona de Castilla y el comercio exterior*, op. cit., p. 72.

⁸² *Ibidem*, p. 74.

despachadas en la Cámara omitieron esta clase de licencias, como correspondía a un contexto bélico⁸³.

Desde el medievo, se combinaron las prohibiciones generales de saca con la expedición de licencias particulares. Si decíamos que, en términos generales, la licencia volvía lícito un acto de entrada ilegal, este principio es aplicable a la saca de cosas vedadas, en este caso como manifestación de la gracia real⁸⁴. Pino Abad traza el itinerario medieval de esta clase de licencias, cuya primera mención se advirtió en un ordenamiento aprobado en las Cortes de Haro de 1268. Para el caso concreto de la saca de caballos, en las Cortes de Alcalá de 1348 se sentaron los requisitos necesarios para obtener la licencia de saca, consistentes en el pago del diezmo correspondiente, la salida por los puertos señalados, una edad de los caballos de al menos cuatro años y la exclusión total de yeguas. Tanto creció el número de las licencias de saca, que se impuso la fijación de una *tabla* con las cantidades que debían ser abonadas para permitir la salida de los bienes.

Por lo tanto, tales licencias tuvieron una clara dimensión venal, pero ello no entraba en conflicto, tampoco, con el argumento implícito que las fundamentaba, la construcción y protección de tal espacio cortesano. Pero resultado de esta tendencia fue una llamativa disminución de la cabaña caballar, hasta tal punto que las Cortes de Palencia de 1388 suplicaron exitosamente a Juan I la suspensión de tales licencias, aunque a los dos años se retomaron las licencias de saca de moneda, y paulatinamente se extendieron a otros bienes. Pino menciona diferentes ejemplos de licencias de saca de caballos durante la

⁸³ En la “Tabla de lo que se despacha en Cons[e]jo de Cámara”, en IVDJ, e. 90, c. 129, nº 533, tan sólo se lee: “Minuta de saca de pan para Aragón; saca de pan por mar; prorrogación de saca de pan; saca de pan al rey de Portugal para los lugares que tiene en África; cédula para q[ue] se saque por mar el trigo que estaua mandado sacar por tierra”.

⁸⁴ A este respecto, un gran entendido en la materia, Pedro González de Salcedo, escribió: “Aunque la conveniencia pública justifica la prohibición de los comercios y extracción de géneros de ciertos reinos y provincias, siempre queda a salvo el derecho y soberanía del Príncipe para dar licencias de sacas, alzando por ellas la suspensión que impuso y desvaneciendo la cualidad que pasaba a delito, el tráfico no obrado en su virtud” (*Tratado iurídico-político del contra-bando. Dedícale al Excelentísimo señor Don Luis Méndez de Haro y Guzmán, marqués del Carpio*,... Escribíale el Lic. D. Pedro González de Salcedo,... Con privilegio. En Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, año 1654, f. 95r. El texto es asimismo transcrito, casi completamente, en M. Pino Abad: *Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla...*, *op. cit.*, p. 119. Sobre la obra, J.L. Bermejo Cabrero: “Dos aproximaciones al contrabando en la España del Antiguo Régimen”, *Cuadernos de Historia del Derecho* 4 (1997) pp. 11-59, pp. 12-18.

primera década del siglo XVI⁸⁵, obtenidos de los libros de cédulas de la Cámara. Esto es, la comunicación *oficial* del rey al beneficiario, pero esta requería un trámite, una información previa que, una vez adquirida fisonomía propia –como hemos señalado–, correspondió a la Cámara de Castilla. Por mucho que, a ojos de la propia Cámara, la expedición de estas licencias estuviese siempre postergada a cuestiones tan importantes como la provisión de oficios temporales y del patronato real.

En el caso de las licencias de saca de caballos, la actitud real nunca estuvo guiada por la generosidad. Al margen de las referidas bases filosóficas, un motivo poderoso para la protección de la cabaña equina fue la necesidad militar, como cuando en 1543 se decidió conceder licencias para andar en mula a todo aquél que cediese caballos para las guardas⁸⁶, ampliadas en número de mil en 1546 a causa de las bajas producidas en Argel⁸⁷; y, en ambos casos contra lo estipulado en la Pragmática de 1534⁸⁸. La itinerancia del emperador y el contexto bélico le hizo más consciente de la necesidad de proteger el patrimonio caballar. En 1541, el Consejo castigó a Juan Sánchez de Cos por haber exportado caballos a Francia. Al año siguiente, se publicó una provisión real en Valladolid y las principales ciudades del reino que insistía en la restricción de la

⁸⁵ Entre ellas cabe mencionar las recibidas por miembros de las Casas Reales, como Artel de Lago, contino, para que pasase por el puerto de Molina de Aragón un macho de silla que había comprado en ella, M. Pino Abad: *Persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla...*, p. 122. Sobre las licencias de saca, pp. 118-126.

⁸⁶ “Asimismo, viendo cuán grato ha sido a todos lo del dar licencia para andar a mula a los que diesen caballos para la gente de las guardas, se habló en que para pagar a la misma gente, se podría sacar alguna cantidad con dar licencia para hasta otros ochocientos caballos o mil, los cuales se podrían reducir a cincuenta ducados el caballo, y con brevedad y contentamiento de todos se sacarían estos dineros [...] En lo de las mulas por ser cosa ésta que ha de depender de la voluntad de V.M., aunque a todos parece que sería bien, se ha acordado que se consulte; V.M. mirará lo que en ello sea servido, que acá a todos parece que esto se podría hacer y sería alguna ayuda para las necesidades presentes, que crea V.M. que es menester ayudarse de todas cosas, segund de la manera que están”, carta de Francisco de los Cobos a Carlos V, Valladolid, 7 de agosto de 1543, *Corpus Documental de Carlos V*, II, pp. 157-158.

⁸⁷ “Ya se terná memoria cómo los días pasados uisto cuánta falta había de caballos que las guardas desos Reinos, por los muchos que se perdieron en Argel y la necesidad que había de ponerse en orden, tuvimos por bien de conceder cierto número de licencias para que pudiesen andar en mulas en esos reinos, sin embargo de la Premática hecha cerca dello, y aquello se convirtiese en encabalar los dichos guardas [...] tenemos por bien de permitir y conceder, como lo hacemos, que se puedan dar mil licencias para que anden alguna mula en esos Reinos demás de las pasadas, sin embargo de la dicha premática...”, carta de Carlos V al Príncipe Felipe, 17 de marzo de 1546.

⁸⁸ *Premática sobre las mulas y cavallos que S.M. hizo en las Cortes de Toledo el año pasado de 1534.*

saca de caballos establecida en las Pragmáticas de 1528 y 1539⁸⁹. Al dejar Castilla en 1543, el Emperador insistió tanto al príncipe regente como al presidente del Consejo Real en la necesidad de castigar a los culpados de saca de caballos y otras cosas vedadas⁹⁰, si bien al Príncipe pronto le surgió la necesidad de recompensar con ellas a los servidores reales⁹¹. Pero tanto en Madrid como en Bruselas se impuso la contención en este terreno, a causa del imperativo militar⁹². Además, en ocasiones las pocas licencias de saca concedidas tropezaban para su uso con dificultades inesperadas, como la retención en un reino intermedio, Francia, de las cabalgaduras para las que se había obtenido, so pretexto de llevar la documentación relativa incompleta⁹³. En las Instrucciones de Carlos V al duque de Alba sobre el viaje del príncipe Felipe en 1548, la materia continuaba presente: “y os encargamos tengáis la mano para que se tenga toda moderación en dar licencias para sacar caballos del reino por la falta que ay dellos,...”⁹⁴. En la gran demanda de caballos influían las necesidades de las casas reales y la Casa y Corte, fijadas, por ejemplo, en el número de 1.500 para la jornada de Inglaterra de 1554⁹⁵.

⁸⁹ J.L. González Novalín: *El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568)*. II, *Cartas y documentos*, Universidad de Oviedo, 1971, p. 66, y fuentes allí citadas. Asimismo, *op. cit.*, I, Oviedo: Universidad, 2008 (2ª ed.), pp. 122-123.

⁹⁰ En las instrucciones a don Fernando de Valdés de 1 de mayo de 1543 se lee: “Habéis de tener muy especial cuidado de hacer todas las provisiones y diligencias necesarias para que se castiguen los que han sido y fueren culpados en el sacar de los caballos, moned y armas y otras cosas vedadas, de manera que para lod e adelante se remedie e haya temor, porque desto, como sabeis, hay mucha necesidad, y aunque se ha platicado diversas veces, nunca se ha hecho provisión que aproveche”, J.L. González Novalín: *op. cit.*, II, p. 72.

⁹¹ “Aquí me importunan diversas personas porque les dé liçencias para sacar cavallos destos Reynos, y como son los más de los que están sirviendo a V. Md., assy en Italia como con su imperial persona, no se les puede negar; V. Magd. ve lo que es servido que se haga en esto, porque con los demás se ha guardado y guarda la orden que V. Md. dexó”, Carta de Felipe II a Carlos V, Valladolid, 5 de mayo de 1545, *Corpus Documental de Carlos V*, II, pp. 383-385, p. 384.

⁹² “Es bien que se tenga limitación en lo de los cavallos, que assy se tiene acá con los que piden liçencia para sacarlos dessos reynos”, carta de Carlos V a Felipe II en Gante, 23 de octubre de 1545, *Corpus Documental de Carlos V*, II, pp. 431-437, p. 436. En su respuesta, de 20 de noviembre desde Madrid, el Príncipe señaló: “En el sacar de los caballos destos reynos, se tiene acá toda la limitación que se puede y es bien menester, según la falta que hay dellos”, *op. cit.*, pp. 437-440, p. 439.

⁹³ Carta de Carlos V a su hijo, 22 de octubre de 1547, *Corpus Documental de Carlos V*, II, pp. 552-555, p. 554.

⁹⁴ *Corpus Documental de Carlos V*, II, pp. 564-569, p. 565.

⁹⁵ M. Fernández Álvarez (ed.): *Corpus Documental de Carlos V*, pp. 658-659, p. 659, carta de Felipe II a Simón Renard, Valladolid, 16 de febrero de 1554.

En la concesión de estas licencias existió un claro punto de inflexión marcado por el año 1594. Con anterioridad, fueron generalmente atendidas las peticiones realizadas en este sentido, siempre, como se ha indicado, a solicitantes con cierta posición cortesana. En consulta de la Cámara en Madrid, a 8 de mayo de 1588, el secretario Juan Vázquez de Salazar remitió un memorial de don Juan Vivas de Cañamas, caballero de la orden de Calatrava y costiller de Su Majestad, en que suplicaba que, por irse con su casa a Valencia donde era natural, se le hiciera merced de licencia para llevar a aquel reino dos caballos españoles; solicitud que fue atendida por el rey⁹⁶. A su vez, el 5 de noviembre de 1589, la Cámara comunicó al rey que don Luis Enríquez, gentilhombre de la cámara del cardenal archiduque, suplicaba licencia de saca al reino de Portugal de un caballo que tenía en la corte, lo que le fue concedido⁹⁷. El año siguiente, a 24 de enero, la Cámara consultó al rey sobre licencia pedida por el conde de Fuentes de Aragón para sacar de Castilla hacia Aragón cuatro caballos, los tres de ellos para coche, lo que fue admitido por el rey⁹⁸.

Sin embargo, como digo, mediada la década de 1590 la actitud regia cambió. La previa solicitud de información a autoridades intermedias fue antesala de la suspensión en la concesión de estas licencias. En consulta de 23 de junio de 1594, se trató la petición por Miguel Pérez de Nueros de autorización para sacar al reino de Aragón dos caballos, y el rey pidió informe del virrey⁹⁹. En ocasiones, la prevención regia se manifestaba incluso ante una actitud favorable de la propia Cámara. El 8 de mayo de 1595 la Cámara trató petición de Manuel Zapata, gentilhombre de la boca del rey, en que decía que, para acudir mejor al servicio real en las ocasiones que se le ofrecían en el reino de Aragón -en que el virrey le ocupaba muchas veces-, tenía necesidad de cuatro caballos españoles. La Cámara abogó por darle la licencia dando primero aviso al virrey y los inquisidores de Zaragoza, que intervenían de forma complementaria a sus atribuciones en la vigilancia del trato ilegal de caballos, por estar el Santo Oficio unificado bajo una misma autoridad en todos los reinos hispanos de la Monarquía¹⁰⁰. Sin embargo, el rey pidió al virrey que informase, el día 12 de ese mismo mes¹⁰¹. La posición real fue cada vez más reticente a autorizar mermas en la masa patrimonial de los reinos. La licencia de saca de

⁹⁶ AHN. Consejos, leg. 4411, n° 66.

⁹⁷ AHN. Consejos, leg. 4411, n° 105.

⁹⁸ AHN. Consejos, leg. 4412, n° 1bis.

⁹⁹ AHN. Consejos, leg. 4413, n° 143.

¹⁰⁰ M.J. Torquemada Sánchez: "Algunos aspectos de la Inquisición en las aduanas del reino", *Revista de la Inquisición* 2 (1992) pp. 41-48, p. 44.

¹⁰¹ AHN. Consejos, leg. 4414, n° 91.

caballos solicitada por don Manuel Zapata, gentilhombre de la boca del rey, natural de Aragón, fue considerada todavía en consulta el 10 de julio de 1595¹⁰², pero otra consulta de 28 de julio de 1596, que afectaba a su propio *marichal de logis*, fue sumamente elocuente respecto a la posición del monarca. Don Diego de Espinosa, hijo primogénito del *marichal*, capitán de infantería que hacía la compañía para servir al rey cerca del adelantado de Castilla, pidió licencia de saca de caballos, negada por Felipe II¹⁰³. Éste había graduado hasta tal punto la concesión de estas licencias, que no atendía ni las peticiones de alguien tan apegado a su vida cotidiana y al espacio palaciego como el *marichal de logis*.

Una concurrencia perjudicial: Cámara de Castilla y Consejo Real en la política ecuestre

Por otra parte, la cuestión caballar sirve para advertir que la Cámara sufrió un proceso paulatino de *administrativización* que le llevó mucho más allá de la gestión de la gracia. Consejo Real y Consejo de Cámara ocuparon así un ámbito parejo de difícil distinción, en el que por ejemplo, este último tramitó las Ordenanzas genéricas de fomento de la cría caballar; mientras que la misma cuestión afectaba al Consejo Real, en primer lugar, en las órdenes libradas por el Consejo a los corregidores; en segundo, eventualmente, en los acuerdos de las *Consultas de los Viernes* y, finalmente, de forma indirecta, a la hora de confirmar las Ordenanzas locales, en las que puntos como el fomento de la cría caballar y la conservación forestal solían ser habituales.

Pero a la vez que en tiempo de Carlos V —como señalábamos— se atendía a vigilar la saca, también se atendió a favorecer el aumento de la cabaña caballar. La gran presión ejercida sobre ella no sólo atrajo la atención regia, sino también la de diferentes concejos y señores que expresaron su preocupación por el riesgo de pérdida de la casta y pureza de los caballos. En opinión de Pantoja Vallejo, tal fue el caso de Juan Pacheco, comendador de Lopera, resultado de lo cual fue la sobrecarta expedida en Madrid el 30 de marzo de 1546, que refería la Pragmática de 1499 sobre el particular. En ella se señalaba un espacio restringido, del Tajo hacia Andalucía, en el que los caballos que cubriesen a las yeguas debían ser de casta, a cuyo fin serían nombrados veedores que lo dictaminasen¹⁰⁴. En esta reglamentación, que adoptó la forma de Provisión Real,

¹⁰² AHN. Consejos, leg. 4414, n° 133.

¹⁰³ AHN. Consejos, leg. 4414, n° 104.

¹⁰⁴ J.L. Pantoja Vallejo: "Reales Ordenanzas para la cría y casta de ganado caballar en la villa de Lopera en 1546 y 1562", *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses* 158 (1995) pp. 35-45, p. 36.

se advirtió la intervención del Consejo Real, cuya competencia en el ámbito de la creación legislativa tenía un orden general, en la forma de elaboración de Pragmáticas, y otro particular, en forma de Provisiones Reales en nombre y pie de igualdad con el rey, dirigidas a la miríada de entes locales que articulaban el espacio cortesano nacido en la Cámara. Cabe decir que la reglamentación de 10 de junio de 1562, que también tomó la forma de Provisión Real, reflejó el interés de Felipe II por la materia, si no urgente tras el regreso de su jornada europea, sí prioritario, conforme a su importancia. Entre los lugares a los que la disposición fue enviada consta el Partido de Martos, y cada uno de los pueblos que lo conformaban (Arjona, Arjonilla, Higuera de Arjona, Torredonjimeno, Porcuna y Lopera). Es este un detalle relevante, puesto que la densidad del espacio expandido horizontalmente desde la Cámara se aseguraba enviando tal mandato no sólo a la cabeza del Partido, sino a cada uno de los núcleos que lo formaban, tarea de la que se encargó el gobernador del mismo, don Diego de Guzmán.

En esta disposición de 1562 se insistía en lo expresado en 1546, se empeoraban las penas, y se detallaban otros puntos dirigidos a fortalecer la raza, como que los potros cubriesen a las yeguas una vez cumplidos los dos años. En cada pueblo serían nombrados dos comisarios, para que con el corregidor y las justicias escogiesen los caballos que hubieren de tomarse como padres, y acotada una dehesa propia para las yeguas, que en el caso de Lopera fue la del concejo. A su vez, el concejo debía comprar caballos "... que sea bueno y de buena casta e lo tenga para echar por padres a las yeguas de la villa"¹⁰⁵. En rigor, la provisión formaba parte de una serie despachada en fechas sucesivas. El 7 de junio fue dirigida al alcalde mayor de las villas y lugares del priorato de San Juan y al asistente de Sevilla¹⁰⁶, en la que se incluía la obligatoriedad del registro por el día de San Miguel "... ante la justicia y escriu[an]o en cada lugar de las yeguas y potrancas y cauallos y potros que cada ueçino tobiere"¹⁰⁷; pero de todas ellas destaca el hecho de que el desarrollo de parte de los puntos estipulados en una provisión despachada por el Consejo fue cumplido por la Cámara, como, por ejemplo, la designación de los comisarios peritos, de la que me ocuparé.

El 18 de enero de 1566 se despachó nueva carta y provisión, sobrecartada el 16 de diciembre de 1572, que insistía en el cumplimiento de las leyes y pragmáticas que prohibían que en las ciudades de Andalucía y en los pueblos

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 40-43.

¹⁰⁶ Archivo General de Simancas (AGS). Patronato Real, 14-5.

¹⁰⁷ AHN. Consejos, leg. 51.363, "Consulta que hizo en ausencia de Su Magd el Sor Doctor Cogollos en onze de março de 1583 a[ñ]os".

“fuera de ella que son allendetajo” –atención a la percepción geográfica en la gestión del territorio-, “... ningunas personas hechen asno a las yeguas y potrancas sino caualllos que sean de casta y escogidos a uista de personas que en cada pueblo hauía de hauer diputadas para ello...”¹⁰⁸. Un nuevo repunte reglamentario, en un contexto en el que nunca se desatendió la materia, se percibió con ocasión del desplazamiento de Felipe II a Córdoba para celebrar Cortes y atender con más cercanía el levantamiento granadino, circunstancias que le debieron hacer más consciente sobre el particular. Entonces firmó Cédula, el 10 de abril de 1570, que no implicaba novedad respecto a las provisiones de 1562, y que fue inserta en disposición posterior, a la que luego me referiré¹⁰⁹.

Esta Cédula fue también incorporada a otra de 16 de diciembre de 1572, que solicitaba al asistente de Sevilla información puntual sobre el cumplimiento de lo estipulado en la primera, qué puntos faltaban por aplicar, qué yeguas de vientre había en su jurisdicción, cuántas eran cubiertas por un padre, cuánto pagaban sus dueños en concepto de *caballaje*, y, en general, si las Ordenanzas de cría caballar que el propio asistente había remitido eran cumplidas¹¹⁰. Se percibía, en definitiva, una evidente circularidad y sedimentación reglamentaria, contraproducente para el objeto administrativo pretendido y propicia para el incumplimiento de lo reglado. En ello, sin duda, influyó el protagonismo ejercido por la Cámara, coherente como digo con la dinámica de expansión espacial desde el entorno regio, pero desproporcionado para un órgano carente todavía de consistencia institucional y en busca todavía, precisamente, de su dimensión meramente administrativa. En virtud de la referida disposición, la Cámara se aplicó a confirmar las Ordenanzas recibidas, y nombrar los referidos comisarios locales. Un inconveniente añadido para una política exitosa, puesto que la coordinación y unificación de criterios quedaba supeditada, en lo sustancial, a la iniciativa local.

Conforme a ello, la Cámara confirmó, y en su caso limitó, las Ordenanzas de cría que fue recibiendo. El 29 de noviembre de 1576, las de Badajoz, recalcando que “... en esa ciudad como en las demás ciudades, uillas y lugares destos reynos donde ay cría e caualllos aya las d[ic]has dos personas del ayuntami[ent]o o de fuera dél que tengan la experiència y calidades sobred[ic]has para q[ue] con çédula o título n[uest]ro que para ello les mandáremos dar, asistan con el n[uest]ro corregidor o justiçia del tal pueblo o

¹⁰⁸ AHN. Consejos, lib. 550.

¹⁰⁹ AGS. Patronato Real, 14-5.

¹¹⁰ AHN. Consejos, leg. 51.363, “Consulta que hizo en ausencia de Su Mag[esta]d el S[eñ]or Doctor Cogollos en onze de março de 1583 a[ñ]os”.

partido al examen de los cauallos que se huvieren de tomar para padres y hagan lo demás q[ue] tocara a este neg[oci]o de la cría...”¹¹¹. El mismo día era expedido título “para lo de la cría de caballos” en Badajoz en favor de Juan Bravo de Jerez, por un periodo de cuatro años, y otro para Antonio de Morales por dos años¹¹². Esta diferencia en la duración de los títulos se dirigía a garantizar la continuidad de la comisión, en la que el comisario que llevase más tiempo instruyese al más reciente. Se asiste así a otra de las figuras administrativas de la Edad Moderna que indujo la cría caballar, como era el procedimiento comisional¹¹³.

El 31 de diciembre de 1576 fueron confirmadas las Ordenanzas de Sevilla (donde Juan Núñez de Pina fue nombrado comisario por un periodo de cuatro años)¹¹⁴ y las del partido de Mérida, en el que recibió título de comisario Juan de Vera de Mendoza¹¹⁵. Las Ordenanzas de la Orden de Calatrava en el partido de Andalucía esperaron hasta el 8 de marzo de 1578, y supusieron la confirmación particular de cada uno de los lugares que lo constituían¹¹⁶, de tal manera que puede concluirse que la función de cohesión territorial ejercida desde la Cámara no tenía límites jurisdiccionales. Al margen de la indicada ineficacia de la acumulación reglamentaria, pues como hemos visto era espacio sometido ya a atención legal en 1546 y 1562. Las Ordenanzas de Plasencia fueron confirmadas el 10 de mayo de 1578 y designado comisario el regidor Vasco de Carvajal¹¹⁷. Las de Ronda fueron confirmadas el 24 de junio de 1578, donde Juan de Ovalle fue nombrado comisario por cuatro años, y Juan de Escobedo de Santander por dos años¹¹⁸. Como también lo fueron las de Marbella, donde fue nombrado juez comisario por cuatro años el capitán Juan

¹¹¹ AHN. Consejos, lib. 550, f. 2r. Ordenanzas en ff. 3r.-5v., firmadas por el rey, refrendadas por Juan Vázquez de Salazar y señaladas por el licenciado Fuenmayor.

¹¹² *Ibidem*, f. 6r.

¹¹³ O. Hintze: “El comisario y su significación en la historia general de la administración. Estudio comparativo”, *Historia de las Formas Políticas*, Madrid: 1968, pp. 155-192; I. Gómez González: “Más allá de la colegialidad: una aproximación al juez de comisión en la España del Antiguo Régimen”, *Crónica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada* 37 (2001) pp. 21-40.

¹¹⁴ AHN. *Ibidem*, ff. 6v.-10r. y 13v.-14r.

¹¹⁵ Ordenanzas igualmente refrendadas por Juan Vázquez de Salazar y señaladas por el licenciado Fuenmayor (AHN. *Íbidem*, ff. 14r.-16v.). El título de Vera, en *Íbidem*, ff. 17v.-18r.

¹¹⁶ Es decir, Martos (AHN. *Ibidem*, ff. 18r.-19r.), Arjona (*ibidem* f. 19r.-v.), Porcuna (*ibidem* ff. 19v.-20r.), Arjonilla (ff. 20r.-21r.), Torredonjimeno (f. 21r.-v.), la Higuera

¹¹⁷ AHN, *ibidem*, ff. 30v.-33r., refrendadas por Juan Vázquez de Salazar y señaladas por el licenciado Fuenmayor. El título, en f. 33r.-v.

¹¹⁸ AHN, *ibidem*, ff. 33v.-40r.

Hurtado de Mendoza¹¹⁹. Las Ordenanzas de Loja recibirían confirmación el 14 de julio de 1579¹²⁰.

En lo relativo a Sevilla, la ejecución de la carta y provisión de 1 de diciembre de 1576 evidenció algunas faltas y elusiones¹²¹, que cabe suponer generales, y que se hizo necesario cubrir por Cédula Real de 22 de julio de 1579. En el periodo intermedio habían surgido dudas en torno a la obligación de echar a caballo las yeguas de silla y servicio, las cherinas y las galicianas. Se hizo además patente que algunos vecinos de Sevilla y su tierra sacaban sus yeguas de sus lugares de residencia y, con la excusa de que en ellos no había buenos caballos para cubrirlas, las llevaban a cubrir por ejemplares que no constaban haber sido examinados. Algunos, incluso, "... traen sus yeguas por las islas y marismas, las cuales uienen preñadas de rocines y asnos...", o las llevaban ante el *padre* pero no se aseguraban de haber quedado preñada. Por su parte, los caballos examinados superaban ampliamente el límite de las 25 yeguas que podían cubrir, o se hacían pasar por caballos examinados ejemplares que en realidad no lo estaban, sin haberse declarado, además, la edad en la que las yeguas quedaban sujetas a los preceptos contenidos en la provisión de diciembre de 1576. Es evidente que su intención era general, pero algunos propietarios de yeguas se negaban a cumplir la orden, al argumentar que era potranca o por el contrario vieja. Ello, por no hablar de obstáculos que afectaban a las propias autoridades municipales, que en algunos casos litigaron ante la designación por el asistente de pagos que consideraban pasto común, como dehesa para las yeguas. O la omisión en la provisión del salario que debían gozar el alguacil y escribano de la comisión.

Además, en opinión de la ciudad de Sevilla, la aplicación de la provisión estaba resultando contraproducente para sus propios fines. Con anterioridad a ella, en Andalucía abundaban dueños de yeguas que, sin ser labradores, la tenían por recreo y contribuían a mantener la raza, dado que las arrendaban para trillar las mieses y, acompañadas por sus potros, estos comían trigo y crecían más fuertes. Pero ante las molestias que recibían a causa de la indicada provisión, habían decidido deshacerse de ellas. Esta disposición estaba animada por una visión productiva, determinada principalmente por la necesidad militar que, paradójicamente, afectaba a aspectos intangibles pero imprescindibles para mantener la raza. Consecuencia de su aplicación había sido la permanencia de

¹¹⁹ AHN, *ibidem*, ff. 40r.-44r.

¹²⁰ AHN, *ibidem*, ff. 46v.-50r., como el resto, refrendadas por Juan Vázquez de Salazar y señaladas por el licenciado Fuenmayor.

¹²¹ Mencionadas ya en carta remitida por el asistente, conde de Barajas, a la Corte, el 14 de julio de 1578.

muchas yeguas en baldíos apartados de los pueblos, que testigos juraban haber sido cubiertas, como obligaba la provisión, si bien lo hacían en falso. En consecuencia, sus potros andaban abandonados, expuestos al riesgo de comer alimentos mortales para ellos como cahanejas y trigueros. Asimismo, se antepone el preñado de las bestias a sus propias condiciones, sin atender al hecho de que las crías de potranca carecían de raza, o que las yeguas recién paridas no podían ser echadas a caballo, porque no podían atender a un tiempo a la cría y a la que estaba por venir. Ante todo ello, las relaciones venidas de Sevilla abogaban por "... mandar suspender el rrigor de la d[ic]ha prouisión y nveua orden...", puesto que "... en el Andaluzía antes que nos mandásemos guardar la d[ic]ha nveua orden cerca de la d[ic]ha cría no auía falta de cauallos, sino mucha abundançia...". Para lo que era necesario atender a que la cuestión residía, sobre todo, en la falta de buenos *padres* y su falta de ejercicio, y en especificar puntos omitidos favorables para el fin pretendido, como la forma de mantener los caballos de casta adquiridos por los concejos. Pero la propia Cédula Real mostraba los males que afectaban a la gestión de la materia, dado que la descripción en su preámbulo de panorama tan desolador tan sólo tuvo el resultado de solicitar al asistente, Conde del Villar, información adicional y encarecerle el señalamiento de dehesas para las yeguas y potros¹²². Como se aprecia, un eterno tejer y destejer administrativo, una contradictoria acumulación de disposiciones que revelaban, cada una de ellas, efectos no deseados, al estar el fomento caballar impulsado por un ánimo predatorio: "... siendo el fin que en lo sobred[ic]ho pretendemos al aumento de la d[ic]ha cría, como negocio tan ymportante y neçesario para las ocasiones de n[uest]ro serui[ci]o, guarda, defensa destos reynos, como lo manifiestan las que cada día se ofrecen..."¹²³.

Todo consistía en la sedimentación acumulativa de regulaciones, en la consulta permanente de peritos y, en definitiva, en una atención fragmentaria del problema, falta de coordinación. Influida con toda probabilidad por los distintos canales a través de los que la materia era gestionada, aunque estos fuesen vecinos y, ocasionalmente, uno sólo. La Cámara estaba sobrada de la ya aludida legitimidad *semántica*, que era la que le conducía a intervenir en la cuestión, pero le faltaban instrumentos materiales para consumir lo acordado en las Ordenanzas. Ello propició la inobservancia práctica de las disposiciones - incluso en la zona protegida con mayor interés, Andalucía-, percibida por un Consejo que, conforme a sus atribuciones y a su posición central en la unidad jurisdiccional regia, disponía de tales medios en mayor medida. Era una

¹²² AHN. Consejos, lib. 550, ff. 50r-51r., que transcribo en apéndice, nº 1.

¹²³ *Ibidem*.

composición de funciones entre ambos organismos que, visto el contenido de las Ordenanzas de la Cámara de 1588, fue impulso indirecto para un fortalecimiento de su dimensión meramente administrativa.

Sin duda, la compleja realidad superaba las previsiones de la norma, y podía propiciar una concurrencia orgánica perjudicial para el manejo de la materia en cuestión, en este caso la cría caballar. Como hemos visto, las sucesivas disposiciones en este ámbito obligaban a reservar dehesas para las yeguas y caballos, pero podía surgir la circunstancia de que tales hubiesen de ser abiertas en terrenos baldíos de los concejos, cuyo rompimiento necesitaba de autorización previa por parte del Consejo Real. Fue lo que sucedió en agosto de 1582 en el caso del concejo de Calañas, en el arzobispado de Sevilla, que recurrió al Consejo para conseguir el preceptivo permiso y obtuvo una respuesta que ilustraba a las claras la compleja gestión que afectaba a la cuestión caballar: “Acudan a donde se trata deste particular”¹²⁴; respuesta inconcreta que arroja la duda de si el organismo era efectivamente consciente en ese momento de dónde se trataba de ello. Al margen de que cabe suponer que la autorización del rompimiento era competencia propia sobre la que el Consejo hubiera debido definirse, por muy vinculada que estuviese al uso dado a continuación a la tierra.

Como se aprecia, el espacio prioritariamente atendido por la Cámara fue aquél fijado por las sucesivas disposiciones regias como sujeto a protección, Andalucía, pero ni en este caso la gran frecuencia reglamentaria supo cubrir un permanente campo de incertidumbre. El Consejo aparecía algo mejor dotado en este terreno, puesto que a su continuidad horizontal en el espacio cortesano, mediante corregidores y audiencias, unía su presencia en el espacio doméstico del rey –manifestada, entre otros indicios, en la celebración de la *Consulta de los viernes* con la persona real en su antecámara-, compartida con la Cámara. Cualidades a las que se añadían sus atribuciones en cuanto a supervisión del cumplimiento legislativo o, en su caso, dispensa del mismo. Fueron las razones por las que el concejo de Guadalajara recurrió a él para ser autorizado a echar garañón a las yeguas, “... pues está llano que allí no crían sino roçines muy ruines y que criarse mulas le sería gran prouecho a toda la tierra”¹²⁵. En su respuesta, “Diligencias”, el Consejo evidenció su capacidad de graduar la aplicación de la ley en esa continuidad territorial de índole cortesana. Con ello, por lo demás, se hacía manifiesta su identificación con la persona real.

¹²⁴ AHN. Consejos, leg. 51.364, “Consulta que hizo en ausencia de Su Magd. el S[añ]or licen[cia]do Fernando Nyño de Guevara en tres de agosto 1582 a[ñ]os”.

¹²⁵ AHN. Consejos, leg. 51.363, “Consulta que hizo en ausencia de Su Mag[esta]d el S[añ]or licen[cia]do Fuenmayor en siete de hebrero de 1583 a[ñ]os”.

Esta acumulación de factores le convirtió en medio para tratar de resolver, o por lo menos disminuir, la errática gestión de la política caballar, al que recurrían espontáneamente los vecinos del propio espacio teóricamente protegido. Sus quejas revelaban que, muy al contrario de lo pretendido, la repetida reglamentación en la materia se caracterizaba por su ineffectividad. En consulta de 28 de enero de 1583, el Consejo consideró la denuncia de Juan de Medina Pizarro y otros vecinos de Arcos de la Frontera acerca de los abusos de la justicia y regidores de la ciudad, quienes se valían de sus oficios para comprar caballos de ruin casta, examinarlos favorablemente e imponerlos a los dueños de las yeguas para cubrirlas. Por ello solicitaron la observancia de lo legislado en cuanto a la libertad de estos últimos para elegir *padre*, y que se impidiera a los regidores y justicia echar sus caballos a las yeguas ni examinar durante su permanencia en tales oficios. Así como que fuese señalada dehesa para las yeguas¹²⁶. La respuesta del Consejo evidenció la endémica irresolución de la materia, pero también el deseo de ponerla fin: “Sébase lo q[ue] ay en esto y júntese”, antesala de una petición más explícita de cuentas a Juan Vázquez de Salazar. El secretario de la Cámara se limitó a exponer los pasos ya descritos, pero mucho nos tememos que la decisión definitiva del Consejo no puso fin a la situación: “Prouisión para (que) el alcalde mayor uea esto y cumpla y guarde lo que en esto está prouenido y embíe relación al Consejo”¹²⁷.

No obstante, mediada la década de 1580 son varios los indicios que permiten apreciar una mayor atención a la materia, en relación, además, con el ejercicio ecuestre; en Madrid se reservó espacio en el Prado de San Jerónimo para que hiciesen carreras los caballeros de la Corte, por Cédula Real de 2 de mayo de 1587¹²⁸. A su vez, con el fin de preservar la raza cordobesa, se decidió

¹²⁶ AHN. Consejos, leg. 51.363, “Consulta que hizo en ausencia de Su Mag[esta]d el S[eñ]or liçen[cia]do Ximénez Ortiz en 28 de henero de 1583 a[ñ]os”.

¹²⁷ AHN. Consejos, leg. 51.363, “Consulta que hizo en ausencia de Su Mag[esta]d el S[eñ]or Doctor Cogollos en onze de março de 1583 a[ñ]os”. Lo transcribo en apéndice, nº 2.

¹²⁸ “El rey. Por quanto por parte de uos el q[once]j[o], just[ici]a y regimy[en]to de la u[ill]a de M[adri]d nos fue fecha rrelaçion que para que se executasen (sic-exercitasen) los caualleros desta uilla y Corte y otros particulares aficionados a este ministerio auíades acordado q se hiziese una carrera en el Prado de San Ger[óni]mo en la parte que pareçiese más conueniente con sus petriles y demás adorno neçesario pues hera cosa tan conuiniente y que la auía en las demás çiudades y uillas destos reynos y lo que se gastase se pagase de los propios y señaladamente del repartimi[en]to que se hiziere p[ar]a pagar el ensancho que se hizo a la puerta de los pies de la yglesia de señor Santiago en las casas que se quitaron a don Pedro de Ludeña con que se hiziese conforme a la traza y condiçiones que estauan echas y no exçediese el gasto della a toda costa de quatro myll rreales suplicándonos fuésemos seruydo dar licencia para que se hiziese la dicha carrera en la manera susod[ic]ho con ynterbençion de uno de los del n[uest]ro q[onsej]o o como la n[uest]ra m[e]r[ce]d fuese. Lo

enviar allí al caballo “Infantillo”, “y dos hacas las más medianas y bien hechas de pies y manos que huviere, y de mejor talle y un frisón mediano”. El apunte permite deducir que los caballos de las casas reales estaban, en este terreno, vinculados a la legislación general, puesto que conforme a la provisión de 1562 “... a mediado hebrero han de entrar en el uerde todos los caualllos que han de cubrir,...”¹²⁹. Por su parte, la acumulación reglamentaria continuó, y el 7 de noviembre de 1587 fue remitida nueva provisión al alcalde mayor del priorato de San Juan que sobrecartaba la de 7 de junio de 1562, y la Cédula de 10 de abril de 1570, insistiendo en el registro anual de todas las yeguas y potrancas, caballos y potros, la compra a cargo de los concejos de buenos *padres*, la designación de veedores, etc., etc.¹³⁰. Asimismo, en la *Pracmática (sic) en que se mandan guardar las que se expresan con sus adiciones y declaraciones, se prohibe moderar sus penas, y se manda que se executen de oficio quando no aya denunciador...*, de 31 de diciembre de 1593, se incluyó la de 1562 sobre cría de caballos. Al remontarse esta Pragmática al comienzo del reinado de Felipe II, e incluir la práctica totalidad de las incluidas en su tiempo, permitía juzgar la eficacia previa del Consejo en la guarda de las leyes, entre ellas las relativas al fomento de la cría caballar, y la conciencia de la *Junta de Gobierno* al respecto¹³¹. Con la declarada intención de asegurar su ejecución, la Pragmática incluyó el nombramiento anual de un ministro en Consejo, Chancillerías y Audiencias al cargo de su cumplimiento, que rendiría cuenta de su actuación a Presidentes y Regentes, “... para que conforme a la relación que de ello hicieren se prouea lo que conuenga”. La mención de la materia por administrar, fuese la cría de caballos u otra cualquiera, siempre era elusiva, más centrada en la forma de gestión que en la enunciación clara de las medidas pertinentes. Pero, próximo ya el cambio de siglo, no se consiguió introducir una novedad significativa en la gestión de la materia caballar, como indica la *Premática en que se pdohibe la saca de yeguas de la Andaluzía a Castilla, sino fueren de menos de la marca, y conforme aquí se manda*, dada en Madrid el 1 de febrero de 1596. A su vez, en las *Ordenanzas del Consejo* de 1598 tampoco había una mención literal de la cuestión, pero podía entenderse incluida en el

qual uisto fue acordado q deuíamos mandar dar esta n[uest]ra çédula en la d[ic]ha rrazón e nos tvuímoslo por bien, por la q[ua]l uos damos lic[e]ncia y facultad para que con ynterbención del l[icencia]do Ximénez Ortiz del n[uest]ro Q[onsej]º podáis hazer la d[ic]ha carrera de caualllos en el d[ic]ho Prado de Sant Gerónimo en la parte que pareçiere más cómoda y conbeni[en]te para ello con sus pretilles conforme a la d[ic]ha traça y condiciones...”, Aranjuez, 2 de mayo de 1587, AHN. Consejos, leg. 41.054, f. 213v.

¹²⁹ IVDJ. Ms. 26-V-20, Tortosa, 1 de enero de 1586, de mano de don Diego de Haro.

¹³⁰ AGS. Patronato Real, 14-5.

¹³¹ British Library. Additional, 9933, f. 509.

encargo general de diferentes aspectos del fomento que el documento hacía a la Sala de Gobierno, instituida por las propias Ordenanzas¹³², como también sucedía en las de 1608¹³³.

En adelante, el contexto bélico favoreció que el Consejo mantuviese su atención sobre el fomento de la cría, si bien, más que como actitud espontánea entre sus muchas atribuciones, como respuesta a requerimientos regios que le reclamaban atención al particular. El licenciado Don Antonio de Camporredondo, oidor del Consejo, se expresaba el 9 de enero de 1644 en carta a Felipe IV del siguiente modo: “En cumplimiento de lo que U. M. fue seruido de mandarme que leuantase 450 cauallos para el exército de Aragón y los pusiese en él este mes de febrero he hecho la diligencia en la prouincia de Jaén, que se me señaló, y encargado el cuydado a D Alonso de Nauarra y Cárcamo correg[id]or de aquella ciudad...”, para describir a continuación las dificultades para pagar las cabalgaduras¹³⁴. Otra Provisión Real del Consejo insistió en 1669 en puntos semejantes a los ya expuestos (especialmente en lo relativo al ganado equino en el Reino de Toledo). Como hizo igualmente otra Provisión emitida dos años después, que obligaba a dejar prueba física en el animal (una hendidura en la oreja derecha) de su correspondiente registro. Al tiempo que se insistía en la prohibición de sacar yeguas y potrancas de Andalucía, Murcia y Extremadura. Otra Provisión fechada en 1674, a consecuencia de litigio planteado por las ciudades de Ciudad Real, Almagro, Villanueva de los Infantes y lugares de sus partidos, insistió en estos puntos¹³⁵.

No obstante, cabe especular con la sombra del incumplimiento propia de la reiteración legislativa, dado que en 1697 y 1702 sendos Decretos Reales insistieron al Consejo en atender la cuestión¹³⁶. Cuestión de difícil ejecución, si se considera la disposición de unos medios siempre escasos y desproporcionados para vigilar un animal como el caballo, de gran valor productivo y bélico y capaz, llegado el caso, de desplazarse a gran velocidad. Y no parece que la situación cambiase en el Siglo XVIII, como indica la real resolución y provisión del Consejo de 1709, o los Reales Decretos de 1714

¹³² “... que se restaure el trato y comercio y agricultura, la labrança y criança y la conseruación y aumento de los montes y plantíos, y de reformar la carestía general que ay en todas las cosas...”, o bien en la cláusula: “Finalmente verán todo lo que el Consejo tratava del gobierno y lo que yo particularmente les remitiere, demás de lo susodicho...”, Salustiano de DIOS, *Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla*, Salamanca: Diputación Provincial, 1986, pp. 117-118.

¹³³ *Ibidem*, pp. 123-124.

¹³⁴ AHN. Consejos, leg. 4429.

¹³⁵ *Ibidem*, pp. 182-183.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 201.

restringidos al área andaluza¹³⁷. Por tales razones, el caballo despertaba gran codicia, especialmente en tiempo de guerra, y la señalada falta de medios se entrevé ya en muchas de las referidas disposiciones bajomedievales, de cuyo contenido se deduce que no debía ser excepcional la saca violenta en grupo, ante la que los lugareños debían *apellidarse* y repicar las campanas, para tratar de prenderlos y entregarlos al alcalde de sacas¹³⁸.

Para apreciar un cambio sustancial en la gestión de la cría y protección caballar habría que esperar ya al siglo XVIII, cuando fue instituida la llamada *Junta de Caballería*, en la que la esencia doméstica de la administración general implicó la presencia tanto de ministros de los Consejos, como de la Casa Real: el Gobernador del Consejo y su decano, el Caballerizo Mayor, el asesor de las caballerizas, ministros de capa y espada del Consejo de Guerra y un secretario, para conocer privativamente de lo relativo a cría de caballos, su aumento y conservación, con inhibición del resto de Consejos y tribunales¹³⁹.

Conclusión

En las páginas precedentes hemos asistido, con el pretexto del estudio de la política caballar, a la emanación de un sentido patrimonial desde la Cámara regia. Y en segundo lugar, al desarrollo de fórmulas administrativas para legalizar la pérdida patrimonial representada para el rey por la salida de los caballos del reino, en este caso el de Castilla. Al tiempo que el Consejo Real, y la propia Cámara, aplicaban sus atribuciones en el área del fomento para tratar de mantener nutrida la masa patrimonial equina. Hecho de importancia capital, puesto que ilustraba la definición paulatina de un ámbito de gestión meramente administrativo. En ese contexto, y al hilo de las dificultades descritas para coordinar una política eficaz, nos cabe la duda legítima de la verdadera capacidad de la Cámara para conciliar su dimensiones *graciosa* y la administrativa.

Por su parte, el Consejo también padecía sus propios achaques. En relación con él, el tema caballar permite apreciar las contradicciones que le afectaban en su ejercicio. Como tenía que lidiar con una variedad tan amplia de competencias administrativas, resultaba francamente complicado atender los respectivos intereses de cada una de ellas, la mayoría de las veces contradictorios. La guerra, el transporte y la producción necesitaban del caballo; esto no sólo implicó la prohibición de su salida del reino, obtenida sólo por vía de gracia,

¹³⁷ *Ibidem*, pp. 201-202.

¹³⁸ *Ibidem*, pp. 206-208.

¹³⁹ *Ibidem*, pp. 183-184.

sino una limitación de su uso suntuario, fuese impidiendo periódicamente su uso en coches¹⁴⁰ o fuese vetando el uso de la gualdrapa, adorno que se entendía quitaba brío al caballo, imprescindible para su uso militar. Indirectamente, esta necesidad fue convirtiendo en legal y aceptado el uso de mulos para cabalgar o arrastrar coches. Pero, a su vez, el uso de mulas para estos menesteres las detraía de las labores agrícolas, campo en el que el Consejo sufría para conciliar los fines de la agricultura y la ganadería¹⁴¹. Con propósito de arbitrar medidas que armonizasen estos principios, las diferentes materias se encargaban a un oidor en concreto –caso de la Presidencia de la Mesta-, o a un grupo reducido de ellos, eso cuando estos comités no implicaban a ministros ajenos al Consejo, constituyendo la respectiva Junta cortesana. Pero ello sólo tendía a empeorar las cosas, pues constituía una suerte de encastillamiento, de fortalecimiento institucional de cada una de las respectivas áreas, que favorecía una relación conflictiva entre todas ellas.

¹⁴⁰ Al respecto, cfr. el trabajo de A. López Álvarez: *op. cit.*

¹⁴¹ La opinión sobre el beneficio del arado con bueyes respecto al realizado con mulas estaba muy extendida en la Castilla de la época (otra cosa es el grado de seguimiento de tal criterio), M. Caja De Leruela: *Restauración de la abundancia de España o prestantísimo, único y fácil reparo de su carestía general...*, segunda reimpresión. Con licencia, En Madrid, año de MDCCXXXII, p. 133; F. Brumont: *Campo y campesinos en Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II*, Madrid: 1984, p. 117.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Cédula Real al Conde del Villar sobre la cría de caballos. Madrid, 22 de julio de 1579 (¹⁴²).

“El rey.

Conde del Uillar pariente n[uest]ro asistente de la çiudad de Seuilla. Ya sabéys cómo por una nra carta y prouision firmada de mi mano, sellada con nro sello dada en Madrid a prim[er]o de dezienbre del año pasado de mill y quinientos y setenta y seys proueymos y mandamos que demás de las leyes y prematicas destos reynos, cartas y pruisiones nras por dondestá prohiuido y uedado que así en las çiudades, uillas y liugares de la proui^a de laAndaluzía como en los pueblos que son fuera della, allende de Tajo ningunas personas hechen asnos garañones a las yeguas y potranzas sino caualllos que sean de casta y escogidos, se guardase en esa çiudad y su jurion y uillas y lugares exemidos della çierta orden que por algunos pareçeres y relaçiones que de allá se enuiaron, pareçía conuenir para el aumento de la cría y raza de caualllos según más largo en la dha nra carta y prouisión a que nos referimos se contiene; y hauiéndose començado a usar y poner en exón. la dha nveua orden de algunas personas zelosas de nro serui^o y del bien pú[bli]co emos sido informado q en los capítulos della se dexaron de ordenar y declarar algunas cosas conuinientes y nesçesaris para el benefiçio de lo q[ue] se pretende y para escusar molestias y uejaciones a los criadores de las yaguas, como es declarar si las yeguas de silla y de serui[ci]o y las que llaman cherinas, galizianas se an de hechar a cau[all]o o no, y que algunos uezinos desa ciudad y su tierra sacan las yeguas fuera de sus pueblos deziendo que en ello no ay buenos caualllos, ni a su gusto, y las lleuan a cubrir fuera desa juridicion, de caualllos que no consta por testimonios ser examinados sino por informaiones que dan y otros traen sus yeguas por las islas y marismas, los quales uienen preñadas de rocines y asnos y los dueños se descargan con dezir q no las echaron ello ni sauen si uienen cubiertas aunque estan preñadas, y que muchos uezinos que tienen yeguas de uientre las hechan al [...] con el cauallo examinado que está para cubrir otra yeguas, el qual no las cubre y ellos se descargan diziendo que an conplido con hechallas ally sin aueriguar la razón porquel cau[all]o no las cubrió, ni estar en el memorial y declaraciones de los yeguariços de las yeguas que el cau[all]o tiene a su cargo, y que muchas personas hechan al cau[all]o examinado más de treynta yeguas y las

¹⁴² AHN. Consejos, lib. 550, ff. 50r.-51r.

cubre y no consta de pena por la premática y otros dan a entender en los pueblos que son sus caualllos examinados y no siendo los hechan a las yeguas y no ay puesta pena en la dha prematica contra los tales y que algunas personas pretenden que la yegua de tres años es potranca y la de catorze y quinze es uieja y no están obligados a hecharlas al cau[all]º por no se declarar en la d[ic]ha nveua orden, de que hedad an de ser obligados a ello y que ay algunos pleitos sobre que el asistente y diputados señalan dehesa para que anden las yeguas y para que se cubran de los caballos, estando apartadas de los conçejos comarcanos lo contradizen deziendo que es pasto común, y en estos pleytos se pasa el tiempo en que se se an de cubrir las yeguas, y que quando los diputados por nos nombrados en este negº uan a uisitar los conçejos y haçer las diligencias que tenemos mandado lleuan alguazil y escribano y no está declarado el salario q se les a de dar, ni de que se a de pagar, y que sería bien mirar si para el cuerpo desa çiudad se nonbrará alguazil que execute uors mandamientos en lo que a esto tocare, y si en muchos conçejos que an tenido descuido en la ex[ecuci]ón de la dha nra proui[si]ón y unos tienen culpa notable y otros no tanta porque la pena que contra ellos está puesta es muy regurosa, conuendría que en los que no tviiesen tanta culpa hviuese alguna moderación, para que en alguna manera sean castigados.

Y por pte desa ciudad nos ha sido hecha relación que por experiencia se a uisto y entendido que de la/ (f. 50v>) d[ic]ha nveua orden que mandamos guardar en lo tocante a la d[ic]ha cría y raza de caualllos resultan muchos inconuinentes, el primero que hauía muchos onbres en la proui[nci]ª del Andalucía specialmente, en la tierra desa d[ic]ha ciudad que sin ser labradores tenían yeguas por su recreación con que se acrecentaua la raza de caualllos y arrendándolas se trillauan con ellas las mieses y andando los potros con sus madres en la cría comiendo trigo se criauan más fuertes y mejores y uistas las molestias que les han hecho y azen las uendeen y se deshazen dellas, en lo qual no somos seruido, porque demás de perderse la raça y cría de las yeguas los labradores no tienen con que trillar sus sementeras, y que asimismo los que tienen yeguas las traen por los ualdíos apartadas de los pueblos, con solamente un guardador, y el más del t[iem]po están sin él en las yslas y en los d[ic]hos ualdíos donde todo el año uen pocas gentes y que conforme a la nveua orden los criadores dellas son apremiados que den testigos que las ayan uisto cubrir del cauallo examinado y si no lo prueuan los castigan y lleuan sus dineros por manera que los que prueuan bien es perjurandose los testigos y haziendoseles dezir lo que no bieron, porque la que se cubre de noche del cauallo no puede el testigo con uerdad jurar que la uió cubrir y hechando el cauallo y exsaminando a las yeguas cunple el dueño dellas con lo que tenemos mandado, que sacado el

potro mamón de su madre, aparte no se puede sustentar porque andando de por sí an de andar trauados y en dehesas, y en las quales ay yeruas como son canahejas, trigueros y comiéndolas los tales potros se mueren, y que por esta causa uenden los d[ic]hos potros a personas que desde luego se siruen dellos y bienen a no balar nada y a lleuallos a otras partes y los criadores son molestados y así se pierde la raza de los tales caualllos, y que los potros acauado el agosto andando sueltos con las madres se sustentan y crían muy mejor que desta manera, y trayéndolas en las dehezas se pierden, y que las potrancas de dos años cubiertas del cab[all]º se hacen preñadas y las crías no ualen nada, y las d[ic]has potrancas uienen después a ser muy ruines y que las yeguas recién paridas echándolas al caballo no pueden criar la cría que tienen ni la de la uiente, y se uiene a perder lo uno y lo otro y es en gran daño y perjui[ci]º de la cría y raza de los caualllos, y que mandándonos dar salario a los que an de entender en este negoçio al que prueua bien le lleuando sacar la manifestación dos r[eal]es, y de hazer la berificación ueynte y quatro reales y diez y ocho del examen y ponen un criado que corre los caualllos y por correrlos lleva quatro r[eale]s y diez y ocho del examen y ponen un criado que corre los caualllos y por correrlos lleva quatro r[eale]s y medio al escribano por la d[ic]ha uerificación de que recibe mucho agrauio y que en el Andaluzía antes que nos mandásemos guardar la d[ic]ha nveua orden çerca de la d[ic]ha cria no auía falta de caualllos, sino mucha abundançia y que no ser buenos consiste más en la falta de buenos padres donde se crien y en el poco exerçio y uso dellos que no en hechar buenos caballos que cubran las yeguas, porque a nadie importa más la buena raza que al dueño de la yegua y ques de creer que lo procurará con particular cuidado) por el aprouechamito que dello se le sigue y que lo contenido en los dhos capítulos se a usado con mucho rigor con los labradores y personas que tienen yeguas y se han deshecho y deshazen dellas y aún aconteçido matar los potros por la pena que tienen si los alla con las yeguas, y que a esta causa se siente notablemente la falta que ay de yeguas y potros y ansimis[m]º mando por los d[ic]hos capitulos que los concejos conpren caualllos y que ay muchos que no tienen propios para ello y otros aunq[ue] tienen agunos no tantos como son menester para conprarlos para las yeguas que ay y que en las dhas ordenanças no se da ninguna orden cómo se an de sustentar los d[ic]hos caualllos al t[iem]po que los tubieren, siendo nesçess[ari]o questén en buena caualleriça y bien mantenidos y que por auer traydo... a los dueños de las d[ic]has yeguas de los lugares donde biuen y auerse hecho proceso contra ellos y penándoles no solamente an bendido las yeguas para pagallas pero aún sus haziendas y estorbádoles que no puedan entender en sus labores y por un aparte las uenden para pagar las penas y por otra as pierden supp[licán]donos fuesemos seruido de

madar suspender el rrigor de la d[ic]ha prouisión y nveua orden, y que por uirtvd della no se proçeda y se dé medio como la d[ic]ha cría baya en aumento siendo los dueños de las yeguas bien tratados como lo tenemos mandado o como la n[uest]ra mrd fuese.

Y porque n[uest]ra uolvtad a sido y es que la d[ic]ha cría y raza de cauallos/ (f. 51r)> se conserue crezca y aumente así en núm[er]o como en bondad y questo se consiga por los medios mas conuininetes y de menos molestía y bexaçión de n[uest]ros súbditos y naturales q sea posible como cossa tan ymportante a n[uest]ro serui[ci]o guarda y defensa destos reynos como quiera q lo contenido en las d[ic]has leyes y prematicas q sobre esto disponen se a de guardar y cumplir ynbiolablemente os mandamos que en el ayuntami[ent]º desa ciudad hagais dar los capítulos y nveua orden que así mandamos dar sobre lo susodho el año poasado de 1576 y lo referido en esta nra çédula y hauiendo lo tanuién comunicado con los dos comisarios que por orden n[uest]ra tratan lo tocante a la d[ic]ha cría y con las otras personas que pareciere q tienen plática y experiència dello se confiera y platique sobre todo lo susod[ic]ho y si lo que por los d[ic]hos capitulos esta ordenado es lo q conuiene al buen effecto deste negocio será necesario quitar, añadir o emendar en ellas algunas cosas así en lo de la orden como en lo que toca a las penas y de lo que pareciere y se resouiere y acordare q[ue] se deue guardar y cunplir hareys que se hagan las ordenanças que conuengan y enbiarnos las eys con toda breuedad juntamente con u[estt]ro parecer todo ello firmado de u[est]ro nonbre signado de escribano cerrada y sellada en manera que haga fee enuiandonos asimismo relación y pareçer a parte de las dhas ordenanças de lo que pareçe se deue ordenar y prouer en lo que toca a los descuidos y negligencias que a auido por lo pasado ansí en los que an sido poco culpados en ello como en los que antenido más culpa que es uno de los apuntamientos que al principio desta çédula se adbierte, dirigida a Juan Uázquez de Salazar n[uest]ro secretario y de la Cámara para que uistas las d[ic]has ordenanças y relación prouerais lo q[ue] fueredes seruido y en el entretanto haréys guardar y cunplir lo que así tenemos proueydo y mandado sin que por esto se enpida la ex[ecuci]ón y cunplimiento dello. F[ec]ha en Madrid a ueynte y dos de jullio de mill y qui[nient]ºs y set[ent]ª y nveue años. Yo el rey, refrendada de Juan Uázquez señalada de Fuenmayor”.

“El rey.

Conde pariente. N[uest]ro asistente de la çiudad de Seui[ll]a, Juan Uázquez nos ha hecho relación de lo que le escriuistes en carta de seys del presente, y del testimonio que con ella enuiastes sobre algunas cosas que os pareçe que

deuemos prouer para que se guarde y cunpla en esa ciudad y su partido lo que tenemos ordenado para el aumento de la cría y raza de caualllos y en lo que dezís que el regente y juezes de la n[uest]ra audiencia de los grados desa çiudad conoçen en grado de apelaçion de los negocios que se ofrecen a esto tocantes les emos mandado escribir lo que uereys por la carta que hirá con esta que a sido lo que por agora a pareçido.

Y porque el conde de Barajas n[uest]ro asistente que fue desa ciudad con carta de 14 de jullio del año pasado de setenta y ocho enuió al d[ic]ho secretario Juan Uázquez un memorial de algunas dudas que se le ofrecíam en la prosecución y cunplimiento de la d[ic]ha nveua orden y de otras cosas que le poareçia era neçesario prouer y tanuién por parte desa ciudad se nos ha representado que de guardarse en ella y su partido lo que así tenemos ordenado çerca de lo susodho no solamente se dexa de aumentar la d[ic]ha cría de caballos pero se dismuneye (sic) en gran cantidad por algunas causas que an expresado y siendo el fín que en lo sobred[ic]ho pretendemos el aumento de la d[ic]ha cría, como negocio tan ynportante y neçesario para las ocasiones de n[uest]ro serui[ci]o, guarda defensa destos reynos como lo manifiestan las que cada dia se ofrecen y q todo se consiga por los medios más tolerables y de menos molestia y bexación de n[uest]ros súbditos y naturales enuiamos a mandar q se haga la dilig[enci]^a q bereys con la c[édul]^a q ua con esta y encargamos os procureys q sea con breuedad estando aduertido a mirar si conforme las prim[er]as prouisiones n[uest]ras se han señalado dehesas así para las yeguas y potros desa ciudad, como para los demás lugares de su tierra y uillas eximidas de su juri[sdicci]ón, porque no lo estando parece q sería bien señalarse mobiendo algunas causas preçisas porq[ue] se aya dexado de hazer de que nos abisareys. De Madrid a XXII de jullio de 1578 a^os. Yo el rey refrendada de Juan Uázquez señalda de Fuenmayor". (f. 51r.).

2. “Consulta que hizo en ausencia de Su Magd el Sor. Doctor Cogollos en onze de março de 1583 a^{os}” (¹⁴³).

“15. Juan de Medina Piçaro y consortes, ueçinos de la çiudad de Arcos. Por una petiçión pidió se proueyesen tres cosas. La una que los al[ca]ldes y rexidores de aquella çiudad no examinasen sus caualllos para la raça y cría durante el tiempo de sus off[ici]os porque suçedía que con el poder de sus off[ici]os conprauan caualllos ruines y de poco pr[e]s[ci]o y cubrían con un cauallo 40 e 50 yeguas de que resvltaua quedar muchas uaçías. La otra que atento que en la d[ic]ha çiudad auía muy buena casta de caualllos qualquiera ueçino pudiese libremente echar sus yeguas al cauallo examinado que quisiese. La última que por auer abundançia de término para el pasto y la buena comodidad de las yeguas y potrancas de raça se señalase dehesa apropiada para el d[ic]ho hefecto. Mandóse poner en consulta. Salió decretado que se pusiese lo que ay y se juntase. El d[ic]ho Juan de Medina por otra petiçión dijo que no se hallaua cosa tocante a esto ni se auía presentado ynformación alguna. Pidió que hiciese como tenía pedido. Mandóse uoluer a la consulta. Salió decretado que Juan Uázquez diese un tanto de lo que cerca desto está proueido. Lo que Juan Uázq[ue]z diçe questá proueido es lo siguiente.

Lo primero una prouisión su data en Aranjuez a siete de junio de mill y quinientos y setenta y dos por la qual auiendo preçedido ciertas ynformaciones y aueriguaciones con el pareçer de las justiçias y regimiento y otras personas de algunas çiudades y uillas se manda al asistente de Seuilla pregone y publique en la dha çiudad de Seuilla y en los liugares de su juridiçión que les paresçiere que todos los ueçinos della guarden las leyes y premáticas que proymen que ning[un]a p[er]s[on]a de aquella parte de Tajo eche sus yeguas y potrancas a asno, sino a caualllos de casta y escoxi[d]os a uista de las p[er]sonas diputados p[ar]a ello so las penas contenidas en las d[ic]has leyes. Y p[ar]a sauer si se guarda lo en ellas cont[eni]do que cada un año por el día de San Miguel se haga registro y uisita ante la justiçia y escriu[an]o en cada lugar de las yeguas y potrancas y caualllos y potros que cada ueçino tobiere. Y que dónde obiere yeguas de cría que el conçejo compre y tenga caualllos de casta escoxidos que cada uno cubra ueynte y cinco yeguas y no más y que se nombre p[er]sonas p[ar]a q[ue] bean y examinen los caualllos y quel asistente ueintiquatros, jurados platiquen y confieran cerca de la cría, casta y conseru[aci]ón y aumento della y su bondad, y que se señale dehesa en la parte y lugar más combiniente a la d[ic]ha cría y embien relaçión al Consejo. Y p[ar]a que los u[ec]inos se animen

¹⁴³ AHN. Consejos, leg. 51.363.

a tener yeguas que de la primera cría no paguen alcauala y sean libres de güespedes y por deudas que deuan no se haga execuçión en las d[ic]has yeguas.

Asimismo ay otra Çédula de Su Magd de diez y seis de diciembre de setenta y dos en la qual está yncorporada otra de diez de abril de 70 años p la qual Su Magd m[an]da al d[ic]ho asistente le ymbíe relación de cómo se guarda y cunple lo contenido en la prouisión de suso y que resta por cumplir de lo en ella contenido y qué yeguas de biente ay en la d[ic]ha çiudad y su jur[isdicci]ón y de qué calidad y cuias son y qué tantas yeguas cubre un padre y qué tanto pagan los dueños della del cauallaje y si después q[ue] ymbió ciertas ordenanças se ha guardado lo en ellas contenido p[ar]a que en todo se proueyese lo q[ue] más conbiniese y el d[ic]ho secret[ari]o da fee que en uirtvd de la d[ic]ha prouis[i]ón se an traydo algunas ordenanças que se an confirmado con las limitaçiones que a pareçido conbenir”. En el margen dcho s^o ~~Gallo~~, y a continuación “Uallejo”. En el margen izdo., “Prouisión para el alcalde mayor uea esto y cumpla y guarde lo que en esto está proueydo y embíe relación al Consejo” (rúbrica).

